



Señor
JUEZ LABORAL DEL CIRCUITO
E.S.D

Ref. PODER DE REPRESENTACION

DEMANDANTE: FRANCISCO JAVIER RENGIFO RIOS

DEMANDADO: SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A

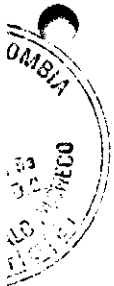
FRANCISCO JAVIER RENGIFO RIOS, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá, identificado con Cédula de Ciudadanía # 79.583.176, actuando en nombre propio, por medio del presente escrito, me permito conferir poder especial, amplio y suficiente al abogado **HECTOR ERNESTO BUENO RINCON**, mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía # 9.736.615 de Armenia, y Tarjeta Profesional #. 149.085 e. Adida por el Consejo Superior de la Judicatura, para que en mi nombre y representación inicie y lleve hasta su terminación **PROCESO LABORAL ORDINARIO DE PRIMERA INSTANCIA**, en contra de la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A** .identificada con NIT 800.144.331-3, representada legalmente por su Gerente General o por quien haga sus veces, para que se hagan las siguientes declaraciones y condenas:

I. DECLARATIVAS

1. Que se declare que el señor **FRANCISCO JAVIER RENGIFO RIOS**, tiene derecho al reconocimiento de la pensión de Sobrevivientes que dejo causada su esposa la señora **LILIANA ELIZABETH GARCIA MORENO**.

Consecuente con la anterior declaración, solicito que se profieran a cargo de la demandada y a favor del demandante, las siguientes:

Carrera 14 No. 9N-16 Oficina 531, Centro Comercial Mocawa Plaza
Teléfono 3104118434
hectorbueno@gmail.com





II. CONDENAS

*Solicito que se condene a la parte demanda a: reconocer y pagar al demandante la pensión de Sobrevivientes desde la fecha del fallecimiento de su esposa la señora **LILIANA ELIZABETH GARCIA MORENO**, es decir desde el 24 de Mayo de 2004.*

- 1. Solicito que se condene a la demandada a reconocer y pagar al demandante, los intereses moratorios que consagra el Artículo 141 de la ley 100 de 1993, igualmente desde el 24 de Mayo de 2004.*
- 2. Que, en ejercicio de las potestades procesales de primera instancia, se condene a la demandada al pago de todo cuanto resulte probado a favor del demandante, **ULTRA Y EXTRA PETITA**.*
- 3. Que se condene a la demandada al pago de las costas y agencias en derecho que genere este proceso.*

Mi apoderado judicial, queda facultado para conciliar, transigir, sustituir, reasumir, tachar de falsos documentos y testigos, notificarse de cualquier acto procesal y las demás contempladas en el artículo 74 del C.G.P y aquellas inherentes al proceso y a la profesión, excepto recibir dineros provenientes del Fondo de Pensión y apertura de productos bancarios.

Atentamente,

FRANCISCO JAVIER RENGIFO RIOS

Cédula de Ciudadanía # 79.583.176

Acepto el poder.

HECTOR ERNESTO BUENO RINCON

Cédula de Ciudadanía # 9.736.615 de Armenia.

T. P. No. 149.085 del C. S. de la J.

NOTARÍA 5 DE BOGOTÁ D.C.
DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL
Artículo 2.2.6.1.2.4.1 del Decreto 1069 de 2015
En Bogotá D.C., República de Colombia, el 28-01-2020, en la Notaría Cinco (5) del Circuito de Bogotá D.C., compareció:
FRANCISCO JAVIER RENGIFO RIOS, identificado con CC/NUIP #0079583176, presentó el documento original y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.
.....
Firma autógrafa
Conforme al Artículo 18 de Decreto-Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil y autorizó el tratamiento de sus datos personales.
NANCY ARÉVALO PACHECO
Notaría cinco (5) del Circuito de Bogotá D.C. - Encargada
Consulte este documento en www.notariasegura.com.co
Número Único de Transacción: 5zsrdtwej6q0 | 28/01/2020 - 11:58:41:017

55829

Carrera 14 No. 9N-16 Oficina 531, Centro Comercial Mocawa Plaza
Teléfono 3104118434
hectorbueno@gmail.com





Guadalajara de Buga, abril 2021

Señor
JUEZ LABORAL DEL CIRCUITO (REPARTO)
Guadalajara de Buga, Valle del Cauca

Ref. PROCESO LABORAL ORDINARIO RECONOCIMIENTO DE PENSION DE SOBREVIVIENTE.

HECTOR ERNESTO BUENO RINCON, mayor de edad, con residencia y domicilio en la ciudad de Armenia, Quindío, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.736.615 de la ciudad de Armenia, Quindío, Abogado en ejercicio, portador de la tarjeta profesional No. 149.085 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando en nombre y representación del señor **FRANCISCO JAVIER RENGIFO RIOS**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.583.176 de Bogotá, Cundinamarca, con residencia y domicilio en el Municipio de Guadalajara de Buga, Valle del Cauca, a usted señor Juez con todo respeto me permito presentar **DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA**, en contra de la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.**, representada legalmente por el señor **JUAN PABLO SALAZAR ARISTIZÁBAL** o quien haga sus veces, domiciliada en la ciudad de Bogotá; demanda que formulo de conformidad con los siguientes,



ALJ ABOGADOS
HECHOS
Asesorías Legales y Jurídicas

PRIMERO: Mi prohijado nació el 03 de diciembre de 1971, en la ciudad de Bogotá D.C.

SEGUNDO: Mi prohijado conformó una comunidad de vida compartiendo techo, lecho y mesa con la señora **LILIANA ELIZABETH GARCÍA MORENO**, quien se identificaba con cedula de ciudadanía No. 52.259.756 desde el 05 de enero de 1998 al 24 de mayo de 2004.

TERCERO: Mi prohijado y la señora **LILIANA ELIZABETH GARCÍA MORENO** el 28 de septiembre de 2002 contrajeron matrimonio católico en la Parroquia San Alfonso María de Liguori de la ciudad de Bogotá hasta el día 24 de mayo del 2004 fecha en la que falleció.

CUARTO: Desafortunadamente **LILIANA ELIZABETH GARCÍA** compañera permanente y después esposa de mi prohijado falleció el 24 de mayo del 2004 y con este hecho termino la unión entre los dos.

QUINTO: Mi prohijado presentó reclamación de pensión de sobrevivientes el 29 de junio de 2004, con posterioridad al fallecimiento de su compañera permanente y esposa posteriormente, obteniendo por medio de comunicación No. 0200001024655300 la negativa a la pensión de sobreviviente dando como respuesta A.F.P. PORVENIR:





“Al consultar nuestro sistema observamos que la señora **LILIANA ELIZABETH MORENO** no cumplió con el requisito de fidelidad para acceder a la pensión de sobrevivencia y auxilio funerario, por causa de enfermedad exigido por la reforma pensional, el cual consiste en cumplir con un 20% de fidelidad de cotización al sistema. Según la norma anteriormente descrita este corresponde al tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió los 20 años de edad (02 de octubre de 1995) y la fecha de su fallecimiento (24 de mayo de 2004), que para el caso en estudio – contando todos los periodos cotizados a los fondos de pensiones obligatorias administrados por PORVENIR S.A. se llegó a un 16.35% de fidelidad al haber cotizado 509 días.”

SEXTO: Porvenir desconoce el número de semanas de cotización que se solicitaban para ese momento.

La ley 797 de 2003, que modifico la ley 100 de 1993, establece los requisitos para pensionarse por sobreviviente.

“Requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes

Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:

(...)

2. los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, siempre y cuando este hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los últimos tres años inmediatamente anteriores al fallecimiento y se acreditan las siguientes condiciones...

Dicha norma expresaba cincuenta semanas dentro de los tres años anteriores al fallecimiento, es decir del 25 de mayo de 2001 al 24 de mayo de 2004.

SÉPTIMO: Para ese tiempo la señora Liliana Elizabeth García Moreno Contaba con:

Periodo de Pago	Razón Social	Días Cotizados
2001-08	Multiempleos S. A	30
2001-09	Multiempleos S. A	30
2001-09	Avidesa Mac Pollo	7
2001-10	Avidesa Mac Pollo	30
2001-11	Avidesa Mac Pollo	30
2001-12	Avidesa Mac Pollo	30
2002-01	Avidesa Mac Pollo	30
2002-02	Avidesa Mac Pollo	30
2002-03	Avidesa Mac Pollo	30
2002-04	Avidesa Mac Pollo	30
2002-05	Avidesa Mac Pollo	30
2002-06	Avidesa Mac Pollo	30
2002-06	Avidesa Mac Pollo	1
2002-07	Avidesa Mac Pollo	12



2003-05	Incubadora Andina S. A	30
2003-06	Incubadora Andina S. A	30
2003-07	Incubadora Andina S. A	30
2003-08	Incubadora Andina S. A	30
2003-09	Incubadora Andina S. A	30
2003-10	Incubadora Andina S. A	30
2003-11	Incubadora Andina S. A	26
2004-04	Caja Colombiana de Subsidio Familiar Colsubsidio	10
2004-05	Caja Colombiana de Subsidio Familiar Colsubsidio	24
TOTAL, DIAS		590
TOTAL, SEMANAS		84,28

Como se puede observar se cumplía con el requisito de las cincuenta semanas dentro de los tres años anteriores al cumplimiento de la edad.

Si bien en ese momento se les exigió el requisito de fidelidad al sistema, este ya no está vigente en nuestro ordenamiento jurídico, pues primeramente la Sentencia C-556 de 2009 y posteriormente en diferentes pronunciamientos como lo fue la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, Sentencia SL-14847 (45677), oct. 29/14, M. P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz).

OCTAVO: Para el mes de junio de 2019, mi prohijado radica solicitud a través de apoderado judicial, en la cual solicita nuevamente el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, cuya causante era su esposa la señora **LILIANA ELIZABETH GARCIA**, fallecida el 24 de mayo de 2004, para lo cual el **FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**, niega dicha pretensión, argumentando que no cumplía con el requisito de convivencia mínima de 5 años.

NOVENO: Conforme a la anterior decisión del **FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**, se radica recurso de reposición en el cual se adjuntan declaraciones extra juicio para probar la convivencia, desde el año 1998.

DÉCIMO: Aún con lo anterior, el **FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**, niega la solicitud, argumentando que no se da el cumplimiento de convivencia, aun estando casados al momento de la muerte de la causante con mi prohijado.

DÉCIMO PRIMERO: El 10 de julio de 2020, se radica nuevamente solicitud de reconocimiento de pensión de sobreviviente, y el fondo niega nuevamente la referida pretensión con el argumento de no probada la convivencia por un término de cinco años, desconociendo completamente lo expresado por la Honorable Sala de Casación Laboral, de la Corte Suprema de Justicia el 03 de junio de 2020 en su Jurisprudencia SL1730-2020 frente a la convivencia del afiliado, en la cual se aclara que, existe la diferencia entre el requisito de convivencia entre pensionados al momento de la muerte y afiliados, siendo para el último el único requisito de encontrarse conviviendo con el afiliado al momento del fallecimiento.

DÉCIMO SEGUNDO: El pasado 16 de marzo de 2021, mi poderdante radica nuevamente reclamación administrativa en el Fondo Porvenir, a lo que el 05 de abril



de 2021, nuevamente el Fondo le niega dicha pretensión, argumentando que se requería una convivencia como mínima de 5 años, desconociendo completamente la diferencia entre un afiliado y un pensionado.

PRETENSIONES

Con fundamentos en los hechos expuestos, muy comedidamente solicito al Señor Juez, que previo el reconocimiento de mi personería para actuar como apoderado de la parte demandante y cumplidos los trámites del proceso ordinario laboral, se declare:

PRIMERA. Condenar a la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.**, a reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes de su cónyuge **LILIANA ELIZABETH GARCÍA MORENO** al señor **FRANCISCO JAVIER RENGIFO RIOS**.

SEGUNDA. Condenar a la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.**, a que dicho reconocimiento se debe realizar desde el 24 de mayo de 2004, día del fallecimiento de la cónyuge del señor **FRANCISCO JAVIER RENGIFO**, la señora **LILIANA ELIZABETH GARCIA MORENO** hasta el día que se realice efectivamente el pago, para lo cual el total de las mesadas pensionales acumuladas ascienden a **CIENTO VEINTRICUATRO MILLONES VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE (\$124.022.996)**.

TERCERA. Condenar a la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.**, a que pague los correspondientes intereses moratorios conforme al artículo 141 de la Ley 100, desde el 24 de mayo de 2004, día del fallecimiento de la señora **LILIANA ELIZABETH GARCIA MORENO** cónyuge del señor **FRANCISCO JAVIER RENGIFO** y hasta el día que se realice efectivamente el pago, los cuales se estiman hasta la fecha de la presentación de la presente demanda en un total de **DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS MCTE (\$236.778.927)**.

CUARTA. Igualmente, la entidad demandada deberá cancelar las sumas de dinero que se deriven de la aplicación de los principios de extra y ultra petita.

QUINTA. Condenar a la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.** al pago de las costas y agencias en derecho del proceso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social: Capítulo XIV artículo 74 y siguiente.



RAZONES DE DERECHO

PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE

El artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la Ley 797 de 2003, preceptúa en lo concerniente al derecho a la pensión de sobrevivientes del cónyuge y/o compañeros (as) permanentes, lo siguiente: Beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad.(.) En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte;

b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con éste (sic). La pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).

Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido. En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte correspondiente al literal a) en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente.

Es pertinente que este despacho tenga presente que, a mi prohijado no se le ha otorgado el reconocimiento a la pensión de sobreviviente por parte del Fondo de Pensiones, argumentando que, no se puede comprobar la convivencia de cinco años, toda vez que, solo se está teniendo en cuenta la fecha en la que se llevó a cabo la celebración del matrimonio y desconoce totalmente la vida que sostuvieron como pareja en unión marital de hecho, la cual se ha manifestado y demostrado desde el 05 de enero de 1998.

A continuación, se cita la jurisprudencia que soporta el carácter fundamental de la pensión de sobrevivientes y la posición de la **Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, a través de la sentencia SL-1730 de 2020:**

Como consecuencia de la nueva integración de la Sala, se considera oportuno reevaluar la referida posición jurisprudencial, para sentar una nueva doctrina frente a la correcta interpretación de lo dispuesto en el literal



a) del art. 13 de la Ley 797 de 2003, que se armonice con los fines del Sistema Integral de Seguridad Social en general, y de la pensión de sobrevivientes en particular, así como con las razones que llevaron a establecer el requisito mínimo de convivencia allí previsto, y conforme a ellas, bajo qué presupuesto debía operar.

El Sistema de Seguridad Social Integral propende por la obtención de condiciones de vida dignas, mediante la protección de las contingencias que afectan a las personas y a la comunidad. En armonía con lo dispuesto en el art. 48 de la Constitución Política, la seguridad social es un servicio público obligatorio, que se presta en los términos y condiciones previstas en la ley, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad; de ella, hace parte el Sistema General de Pensiones, instituido con la finalidad específica de amparar de las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte.

Tal como lo recordó el Tribunal, para definir el contenido constitucional del derecho a la pensión de sobrevivientes, la Corte Constitucional ha desarrollado una serie de principios, condensados en la sentencia CC C-1035- 2008, así:

1. Principio de estabilidad económica y social para los allegados del causante:

Desde esta perspectiva, ha dicho la Corte que “la sustitución pensional responde a la necesidad de mantener para su beneficiario, al menos el mismo grado de seguridad social y económica con que contaba en vida del pensionado fallecido, que al desconocerse puede significar, en no pocos casos, reducirlo a una evidente desprotección y posiblemente a la miseria”

2. Principio de reciprocidad y solidaridad entre el causante y sus allegados:

En el mismo sentido, la Corte ha concluido que la sustitución pensional busca impedir que sobrevinida la muerte de uno de los miembros de la pareja, el otro se vea obligado a soportar individualmente las cargas materiales y espirituales, por lo cual “el factor determinante para establecer qué persona tiene derecho a la sustitución pensional en casos de conflicto entre el cónyuge superviviente y la compañera o compañero permanente es el compromiso de apoyo afectivo y de comprensión mutua existente entre la pareja al momento de la muerte de uno de sus integrantes”

3. Principio material para la definición del beneficiario:

En la sentencia C-389 de 1996 “(...) la legislación colombiana acoge un criterio material -esto es la convivencia efectiva al momento de la muerte- como elemento central para determinar quién (sic) es el beneficiario de la sustitución pensional, por lo cual no resulta congruente con esa institución que quien haya procreado uno o más hijos con el pensionado pueda desplazar en el derecho a la sustitución pensional a quien efectivamente convivía con el fallecido”

Por otra parte, al analizar la constitucionalidad del aparte de la disposición que ocupa la atención de la Sala, en la sentencia CC C-1094-2003, la referida Corporación señaló:

2.3.Requisitos y beneficiarios de la pensión de sobrevivientes



Esta Corporación se ha pronunciado acerca de la finalidad y legitimidad de los requisitos de índole temporal o personal que señale el legislador para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Según lo expuesto en la sentencia C-1176 de 2001, **es razonable suponer que las exigencias consignadas en los artículos demandados buscan la protección de los intereses de los miembros del grupo familiar del pensionado que fallece, ante la posible reclamación ilegítima de la pensión por parte de individuos que no tendrían derecho a recibirla con justicia. Igualmente suponer que el señalamiento de exigencias pretende favorecer económicamente a matrimonios y uniones permanentes de hecho que han demostrado un compromiso de vida real y con vocación de permanencia; también se ampara el patrimonio del pensionado, de eventuales maniobras fraudulentas realizadas por personas que sólo persiguen un beneficio económico con la sustitución pensional. Por esto, dijo la Corte, con el establecimiento de tales requisitos se busca desestimular la ejecución de conductas que pudieran dirigirse a obtener ese beneficio económico, de manera artificial e injustificada.**

La jurisprudencia constitucional ha resaltado también que el artículo 48 de la Constitución otorga un amplio margen de decisión al legislador para configurar el régimen de la seguridad social.

En ejercicio de esta atribución y de acuerdo con las disposiciones demandadas, las cuales guardan una estrecha relación material entre sí, el legislador distingue entre requisitos exigidos en relación con las condiciones de causante al momento de su fallecimiento (art. 12) y calidades de los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes (art. 13).

[...]

2.5. Constitucionalidad del artículo 13 de la Ley 797

Los literales a) y b) del artículo 13 en referencia consagran las condiciones para que el cónyuge o compañero o compañera permanente supérstite sea beneficiario de la pensión de sobrevivientes. De ellas, los accionantes impugnan tres aspectos en particular: i) el requisito de convivencia con el fallecido por no menos de 5 años continuos con anterioridad a su muerte; ii) el reconocimiento en forma vitalicia o en forma temporal del derecho a la pensión de sobrevivientes, en consideración a la edad del cónyuge o compañero supérstite; y iii) el reconocimiento en forma vitalicia o en forma temporal del derecho a la pensión de sobrevivientes, en consideración al hecho de haber tenido hijos o no con el causante.

Como se indicó, el legislador, de acuerdo con el ordenamiento constitucional, dispone de una amplia libertad de configuración frente a la pensión de sobrevivientes. Además, según lo tiene establecido esta Corporación, el señalamiento de exigencias de índole personal o temporal para que el cónyuge o compañero permanente del causante tengan acceso a la pensión de sobrevivientes “constituye una garantía de legitimidad y justicia en el otorgamiento de dicha prestación que favorece a los demás miembros del grupo familiar”

En relación con los cargos formulados, la Corte encuentra que, en principio, la norma persigue una finalidad legítima al fijar requisitos a los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, lo cual no atenta contra los fines y principios del sistema. En primer lugar, el régimen de convivencia por 5 años sólo se fija para el caso de los pensionados y, como ya se indicó, con este tipo de disposiciones lo que se pretende es evitar las convivencias de última hora con quien está a punto de fallecer y así acceder a la pensión de sobrevivientes.



Además, según el desarrollo de la institución dado por el Congreso de la República, la pensión de sobrevivientes es asignada, en las condiciones que fija la ley, a diferentes beneficiarios (hijos, padres y hermanos inválidos). Por ello, al establecer este tipo de exigencias frente a la duración de la convivencia, la norma protege a otros posibles beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, lo cual está circunscrito dentro del ámbito de competencia del legislador al regular el derecho a la seguridad social. (Subraya y negrilla fuera de texto)

Para la Sala, dada la nueva revisión del alcance de la norma acusada, las anteriores consideraciones deben permanecer incólumes, ante lo expuesto por la misma Corte Constitucional en la sentencia CC C-336-2014, aducida por la censura, en la que tangencialmente equiparó el requisito de convivencia mínima, en el caso de afiliado y pensionado, y acto seguido citó la sentencia CC C-1176-2001 y la anteriormente referida, en cuanto al límite temporal exigido a los beneficiarios del *pensionado* y su legítimo fin; empero, el análisis de constitucionalidad efectuado se encontraba dirigido en esa oportunidad, a otros supuestos contenidos en la norma, esto es, el aparte final del último inciso del literal b) del art. 13 de la Ley 797 de 2003, por lo que no tiene la virtualidad de modificar lo considerado en la sentencia CC C-1094-2003, además de no constituir el objeto de este recurso.

Y es que, de la redacción del precepto legal, se itera, el literal a) del art. 13 de la Ley 797 de 2003, que modificó el art. 47 de la Ley 100 de 1993, se advierte con suma claridad y contundencia que la exigencia de un tiempo mínimo de convivencia de 5 años allí contenida, se encuentra relacionada únicamente al caso en que la pensión de sobrevivientes se causa por muerte del pensionado; una intelección distinta, comporta la variación de su sentido y alcance, toda vez que, no puede desconocerse tal distinción, que fue expresamente prevista por el legislador en la norma acusada, así:

Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

*a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. **En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado**, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte; (subraya y negrilla fuera de texto)*

Adicionalmente, en la exposición de motivos de la Ley 797 de 2003, cuando se procedió a la sustentación de los preceptos del proyecto de ley, en lo concerniente al artículo 17 «BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES», se precisó que “Se regulan los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes estableciendo uniformidad entre los regímenes de prima media y de ahorro individual con solidaridad. **Adicionalmente se establece que el cónyuge o compañero permanente debe haber convivido con el pensionado por lo menos cuatro años antes de fallecimiento con el fin de evitar fraudes**” (subraya y negrilla fuera de texto).

Desde la expedición de la Ley 100 de 1993, ha sido clara la intención del legislador al establecer una diferenciación entre beneficiarios de la pensión de sobrevivientes por la muerte de **afiliados** al sistema no pensionados, y la de **pensionados**, esto es, la conocida como sustitución pensional, previendo como requisito tan solo en este último



caso, un tiempo mínimo de convivencia, procurando con ello evitar conductas fraudulentas, «convivencias de última hora con quien está a punto de fallecer y así acceder a la pensión de sobrevivientes», por la muerte de quien venía disfrutando de una pensión.

La evidente y contundente distinción efectuada por el legislador en el precepto que se analiza, comporta una legítima finalidad, que perfectamente se acompasa con la principal de la institución que regula, la protección del núcleo familiar del asegurado o asegurada que fallece, que puede verse afectado por la ausencia de la contribución económica que aquel o aquella proporcionaba, bajo el entendido de la ayuda y soporte mutuo que está presente en la familia, que ya sea constituida por vínculos naturales o jurídicos, que en todas sus modalidades se encuentra constitucionalmente protegida, como núcleo esencial de la sociedad (art. 42 CN).

En este punto resulta necesario precisar, que conforme al análisis hasta aquí efectuado, de lo dispuesto en el **literal a)** del art. 13 de la Ley 797 de 2003, para ser considerado beneficiario de la pensión de sobrevivientes, en condición de cónyuge o compañero o compañera permanente supérstite del afiliado al sistema que fallece, no es exigible ningún tiempo *mínimo* de convivencia, toda vez que con la simple acreditación de la calidad exigida, cónyuge o compañero (a), y la conformación del núcleo familiar, con vocación de permanencia, vigente para el momento de la muerte, se da cumplimiento al supuesto previsto en el *literal de la norma analizado*, que da lugar al reconocimiento de las prestaciones derivadas de la contingencia, esto es, la pensión de sobrevivientes, o en su caso, la indemnización sustitutiva de la misma o la devolución de saldos, de acuerdo al régimen de que se trate, y el cumplimiento de los requisitos para la causación de una u otra prestación.

Lo anterior comporta también que, contrario a lo considerado por el Tribunal, para efectos de la aplicación de lo dispuesto en el literal a) del art. 13 de la Ley 797 de 2003, no hay lugar a efectuar ninguna distinción entre beneficiarios de un mismo tipo de causante, para el caso un afiliado, esto es, según la forma en la que se constituya el núcleo familiar, si lo es por vínculos jurídicos o naturales, en tanto éste, es decir, el núcleo familiar, es lo que protege el Sistema General de Seguridad Social. Así lo recordó la Corte Constitucional, en el análisis de constitucionalidad efectuado al art. 163 de la Ley 100 de 1993, antes de ser modificado por el art. 218 de la Ley 1753 de 2015, en la sentencia CC C- 521-2007, que en torno al concepto de familia y su protección sin discriminación, en consideraciones que se avienen al Sistema Pensional, precisó:

Además de ser denominada constitucionalmente como el núcleo fundamental de la sociedad (C.Po. art. 42), la familia ha sido definida por la Corte Constitucional como “Aquella comunidad de personas emparentadas entre sí por vínculos naturales o jurídicos, que funda su existencia en el amor, el respeto y la solidaridad, y que se caracteriza por la unidad de vida o de destino que liga íntimamente a sus miembros o integrantes más próximos”. De su parte, el artículo 5º. de la Carta Política establece que el Estado ampara a la familia como institución básica de la sociedad, mientras el inciso segundo del artículo 42 superior prevé que el Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia.

La jurisprudencia ha señalado el marco constitucional de protección para la familia en los siguientes términos:

“(…) en nuestro país el régimen constitucional de la familia quedó definido: (i) en el artículo 5º de la Carta, que eleva a la categoría de



principio fundamental del Estado la protección de la familia como institución básica de la sociedad; (ii) en el artículo 13, en cuanto dispone que todas las personas nacen libres e iguales y que el origen familiar no puede ser factor de discriminación; (iii) en el artículo 15, al reconocer el derecho de las personas a su intimidad familiar e imponerle al Estado el deber de respetarlo y hacerlo respetar; (iv) en el artículo 28, que garantiza el derecho de la familia a no ser molestada, salvo que medie mandamiento escrito de autoridad competente con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley; (v) en el artículo 33, en cuanto consagra la garantía fundamental de la no incriminación familiar, al señalar que nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil; (vi) en el artículo 43, al imponerle al Estado la obligación de apoyar de manera especial a la mujer cabeza de familia; (vii) en el artículo 44, que eleva a la categoría de derecho fundamental de los niños el tener una familia y no ser separado de ella; y (viii) en el artículo 45, en la medida en que reconoce a los adolescentes el derecho a la protección y a la formación integral”

4. Competencia del legislador para regular el servicio de seguridad social

4.1. Atendiendo a lo dispuesto en los artículos 48, 49, 53 y 150 de la Constitución Política, el Congreso de la República cuenta con atribuciones amplias para configurar el sistema normativo a partir del cual se presta el servicio público de seguridad social. Por tratarse de una actividad que implica atención para el bienestar de la comunidad en materia de salud, con eventuales contingencias para la vida de los asociados, el constituyente quiso que la relación entre las instituciones prestadoras del servicio y los usuarios del mismo, fuera gobernada mediante un sistema legal específico en el cual la voluntad de los contratantes juega un rol secundario frente a las decisiones del legislador, siempre y cuando éstas sean conformes con lo dispuesto en la Carta Política.

Además de servicio público, la seguridad social en salud es un derecho de carácter prestacional consagrado en el artículo 48 de la Constitución Política, concebido como mandato dirigido al Estado Social de Derecho, para ensamblar un sistema conformado por entidades y procedimientos encaminados a ofrecer una cobertura general ante las contingencias que puedan afectar la salud de las personas. Según el constituyente, este derecho ha de ser garantizado con sujeción a los principios de eficiencia, continuidad, universalidad, buena fe y solidaridad, para la prevención, promoción y protección de la salud y el mejoramiento de la calidad de vida de los asociados.

4.2 El marco jurídico diseñado por el constituyente permite al legislador configurar el sistema de seguridad social en salud, dentro de los límites propios del Estado Social de Derecho y de conformidad con los principios, derechos y garantías establecidos en la Constitución Política. Precisamente, el Estatuto Superior consagró una protección igual para las uniones familiares constituidas por vínculos naturales y jurídicos, como también para las conformadas por la decisión libre de contraer matrimonio o la voluntad responsable de conformarla.

[...]

4.8. Para la Sala, la exigencia de convivir durante un lapso superior a dos años para lograr afiliarse como beneficiario del Plan Obligatorio de Salud al compañero (a) permanente, quebranta los derechos a la igualdad, seguridad social, salud, vida, libre desarrollo de la personalidad y protección integral de la familia, por cuanto el constituyente consagró una protección igual para las uniones familiares constituidas por vínculos naturales o jurídicos, como



también para las conformadas por la decisión libre de contraer matrimonio o la voluntad responsable de conformarlas.

Desde una perspectiva constitucional no existe una justificación objetiva y razonable para otorgarle un trato distinto al cónyuge a quien no se le impone la obligación de cumplir un determinado período de convivencia con el afiliado, mientras que el compañero(a) no puede ser afiliado al POS si la unión permanente es inferior a dos años. Sobre esta materia es pertinente recordar el texto del artículo 42 de la Carta Política, según el cual:

[...]

4.10. La diferencia de trato entre el cónyuge del afiliado y el compañero (a) permanente del afiliado a quien se impone la obligación de convivir durante un período mínimo de dos años para acceder a las mismas prestaciones, no está justificada bajo parámetros objetivos y razonables, por cuanto se impone a éste último la carga de permanecer durante dos años sin los beneficios propios del Plan Obligatorio de Salud, brindándole como explicación que se trata de un lapso efímero durante el cual podría afiliarse como trabajador independiente al régimen contributivo o al régimen subsidiado, o acceder a los servicios en calidad de vinculado.

Similares consideraciones podrían hacerse respecto del cónyuge a quien la norma ampara como beneficiario a partir del matrimonio; sin embargo, la disposición, contrariando lo dispuesto en el artículo 13 superior, ordena darle al compañero (a) permanente un trato discriminatorio al imponerle una carga desproporcionada, en cuanto a pesar de estar conformando una familia lo obliga a permanecer durante dos años por fuera del ámbito de cobertura señalado en el artículo 163 de la ley 100 de 1993.

[...]

Mientras el artículo 2º. de la ley 54 de 1990 regula el régimen económico de las uniones maritales de hecho, el artículo 163 de la ley 100 de 1993 se aplica a la cobertura familiar en el Plan Obligatorio de Salud; es decir, una y otra disposición son ontológicamente diferentes, la primera aplicable a las consecuencias económicas derivadas de la unión marital de hecho, al paso que la segunda está relacionada con la protección integral de la familia en cuanto a la prestación del servicio de seguridad social en salud se refiere, materia ésta que vincula la protección eficaz de los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas y a no ser discriminado en razón del origen familiar.

Por esta razón, desde una perspectiva constitucional el término de dos años previsto en el artículo 2º. de la ley 54 de 1990 y el de dos años establecido en el artículo 163 de la ley 100 de 1993, no pueden ser considerados como similares ni mucho menos homologables, pues uno y otro atienden a un origen y a unos propósitos sustancialmente distintos.

En cuanto a lo dispuesto en el art. 10 del Decreto 1889 de 1994, que prevé que se considera compañera o compañero permanente para efectos de la pensión de sobrevivientes causada por la muerte de un afiliado, la última persona que haya hecho vida marital con aquel durante un lapso no inferior a dos (2) años, otrora se consideró por la Sala había perdido fuerza con la entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003, por ser de mayor jerarquía y prevalecer sobre el aludido decreto (CSJ SL1402-2015), y posteriormente, que no resultaba aplicable por cuanto reglamentó parcialmente la Ley 100 de 1993, en su versión primigenia, no así la Ley 797 de 2003 (CSJ SL347-2019).



En esta oportunidad, recoge esta última tesis la Sala, para precisar que el Decreto 1889 de 1994 reglamentó parcialmente las normas del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, por lo que cobijaba las modificaciones a las mismas, siempre que no resultara contrario a ellas.

Empero, como el decreto reglamentario no puede ir más allá de lo dispuesto en la ley, imponiendo requisitos que superen lo legalmente establecido, como lo hizo en su artículo 10, que no está por demás indicar fue subrogado por el artículo 2.2.8.2.3 del Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016, se considera que, para determinar quién ostenta la calidad de compañero o compañera permanente de un afiliado, a efectos de lo dispuesto en el literal a) del art. 13 de la Ley 797 de 2003, que modificó el art. 47 de la Ley 100 de 1993, debe acudirse a la noción constitucional de familia, en la forma en la que ha sido ampliamente analizada por la Corte Constitucional, entre otras, en la providencia citada.

Con lo anterior, la Sala fija el verdadero alcance de la disposición acusada, a la luz del precepto constitucional de favorabilidad, *in dubio pro operario*, esto es, que la convivencia mínima de cinco (5) años, en el supuesto previsto en el literal a) del art. 13 de la Ley 797 de 2003, solo es exigible en caso de muerte del pensionado.

Descendiendo al caso concreto, es importante y pertinente resaltarle a este honorable despacho, que mi prohijado al momento de la muerte de la causante la señora **LILIANA ELIZABETH GARCIA MORENO**, tenían vínculo matrimonial vigente, para lo cual, conforme a esta posición de la Corte Suprema de Justicia y la reiterada por la Corte Constitucional, se ha negado a mi prohijado el derecho a acceder a la pensión de sobrevivientes con el argumento de que aplica para el, el requisito de los cinco años, sin tener en cuenta la amplia jurisprudencia ya citada, en la cual se hace claridad de que estos cinco años, son requisitos exigibles cuando el causante ya es pensionado. Dejando este fundamento jurisprudencial sin ningún tipo de fundamentos los argumentos esgrimidos por el **FONDO DE PENSIONES** para otorgar la pensión de sobreviviente al señor **FRANCISCO JAVIER RENGIFO**.

Por otra parte, la Honorable Corte Constitucional a través de la sentencia **T-370/17** de 06 de junio de 2017, M.P. LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ, refirió:

“(...) La pensión de sobrevivientes tiene como objetivo la protección a la familia del pensionado, concediéndoles la prestación que éste percibía en vida y de este modo permitirles gozar del estatus del que gozaba el trabajador, antes de su fallecimiento. Además, dicha prestación puede llegar a tener el carácter de fundamental si con su ausencia se afecta el mínimo vital del solicitante (...)”.

INTERESES MORATORIOS

Para empezar, es propicio remitirse a la normativa que contempla los intereses moratorios, según lo establecido en la Ley 100 de 1993 en el artículo 141, que en su tenor expresa:

“ARTÍCULO 141. INTERESES DE MORA. A partir del 1o. de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta Ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además



de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectuó el pago”.

Así mismo, se tiene en cuenta lo establecido por la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia del 12 de julio de 2013, Radicación No.66001-31-05-001-2012-00576-01, Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón, expresó:

“Para que los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 empiecen a correr es necesario que: (i) el interesado haya elevado la solicitud al fondo pensional respectivo, habiendo cumplido los requisitos legales para acceder a la prestación y, (ii) que la entidad desconozca los términos establecidos en las leyes 700 y 717 de 2001 y 797 de 2003.”

“(…) Recordemos que en relación con el derecho a percibir los intereses en caso de mora en el pago de mesadas pensionales -que prevé el Artículo 141 de la Ley 100 de 1993-, desde antaño y sin virajes, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha insistido en que los mismos no tienen carácter sancionatorio sino de resarcimiento; por manera que la causación del derecho a percibirlos no está sujeta a condiciones o requisitos distintos al incumplimiento de la respectiva obligación pensional, la cual surge cuando se consolida el derecho prestacional por reunirse los requisitos establecidos en la ley”.

Ahora bien, la misma Corporación en sentencia 085 del 16 de septiembre de 2010, con ponencia de la Dra. María Matilde Trejos Aguilar, estableció:

“(…) De allí que resulte obvio que sólo a partir de la reclamación del derecho y del vencimiento de los términos previstos en la ley para que la administradora decida, o desde el momento en que lo haga negativamente, siendo del caso haber reconocido la prestación, puede hablarse de una posible obligación en mora”.

Por otra parte, y no menos importante, es la posición que ha sostenido la honorable Corte Constitucional, frente al reconocimiento de los intereses moratorios de las mesadas pensionales, para lo cual en la **SU-065-2018**, se ha desarrollado de la siguiente manera:

6.3 Interpretación jurisprudencial de artículo 141 de la Ley 100 de 1993

Del artículo 46 Superior se desprende un deber positivo en cabeza del Estado de dispensar un trato especial a las personas de la tercera edad. Esta obligación va dirigida al Estado, a la sociedad y a la familia, consiste en la protección y asistencia de las personas de la tercera edad, a través de la promoción de su *“integración a la vida activa y comunitaria”*.

La Corte Constitucional ha manifestado que entre los sujetos de especial protección constitucional se encuentran los “adultos mayores” o “personas de la tercera edad”, quienes dado su estado de debilidad, merecen mayor amparo de la sociedad y del Estado. Por ejemplo, en la sentencia T-463 de 2003, esta Corporación expresó lo siguiente:



*“Entre los sujetos de especial tutela constitucional se encuentran los adultos mayores, quienes al alcanzar cierta edad ven disminuida su capacidad física y con ello la posibilidad de ejercer en toda su dimensión algunos de sus derechos. Dada esta pérdida progresiva de - entre otras cosas- la fuerza laboral, es probable que la única fuente de ingresos que puedan percibir sea la pensión. **Es por esto que resulta especialmente grave la no cancelación o la cancelación parcial de las mesadas pensionales, pues ello puede menoscabar el derecho a disfrutar de condiciones de vida digna, el derecho a la salud y el derecho al mínimo vital, entre otros, de las personas ancianas**”.* (Negrilla fuera del texto original)

En concordancia con lo anterior, desde el año 1995 en sede de control abstracto de constitucionalidad, esta Corporación resaltó la importancia del reconocimiento oportuno de las mesadas pensionales para las personas de la tercera edad. Así, en la Sentencia C-367 de 1995, la Corte declaró la exequibilidad del artículo 1617 del Código Civil¹. Para arribar a dicha conclusión, señaló que del artículo 53 Superior se desprende el derecho de los pensionados a recibir las mesadas pensionales de forma oportuna. En palabras de la Corte:

*“No puede concebirse, entonces, a la luz de los actuales principios y preceptos superiores, la posibilidad de que las pensiones pagadas de manera tardía no generen interés moratorio alguno, con el natural deterioro de los ingresos de los pensionados en términos reales, (...). Además, **ninguna razón justificaría que los pensionados, casi en su mayoría personas de la tercera edad cuyo único ingreso es generalmente la pensión, tuvieran que soportar, sin ser adecuadamente resarcidos, los perjuicios causados por la mora y adicionalmente la pérdida del poder adquisitivo de la moneda por el incumplimiento de las entidades correspondientes**”.* (Negrilla fuera del texto original)

Posteriormente, en la Sentencia **C-601 de 2000**, la Corte conoció la demanda de inconstitucionalidad presentada contra el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, en la cual el demandante expresó que “los segmentos normativos “A partir del 1º de enero de 1994” y “de que trata esta ley”, contenidos en el artículo 141 de la ley 100 de 1993”, vulneran el derecho fundamental a la igualdad (art. 13 CP) de aquellas personas que bajo la vigencia de leyes anteriores a la pluricitada Ley 100 de 1993, obtuvieron el derecho al reconocimiento y pago de su pensión, al excluirlas del reconocimiento y pago de los intereses moratorios con ocasión del pago tardío de las mesadas pensionales².

¹ “**ARTICULO 1617**- Si la obligación es de pagar una cantidad de dinero, la indemnización de perjuicios por la mora está sujeta a las reglas siguientes: 1. Se siguen debiendo los intereses convencionales, si se ha pactado un interés superior al legal, o empiezan a deberse los intereses legales, en el caso contrario; quedando, sin embargo, en su fuerza las disposiciones especiales que autoricen el cobro de los intereses corrientes en ciertos casos. El interés legal se fija en seis por ciento anual. 2. El acreedor no tiene necesidad de justificar perjuicios cuando sólo cobra intereses; basta el hecho del retardo. 3. Los intereses atrasados no producen interés. 4. La regla anterior se aplica a toda especie de rentas, cánones y pensiones periódicas”.

² El problema jurídico planteado en aquella oportunidad correspondió con: A juicio el demandante, al ser expedidos los segmentos normativos “A partir del 1º de enero de 1994” y “de que trata esta ley”, contenidos en el artículo 141 de la ley 100 de 1993, el legislador vulneró el derecho fundamental a la igualdad de aquellas personas que bajo la vigencia de leyes anteriores a la citada ley 100 de 1993, obtuvieron el derecho al reconocimiento y pago de su pensión, pues se les excluye del reconocimiento y pago de los intereses moratorios que se ocasionarían en el evento en el cual sus mesadas pensionales le fuesen pagadas de manera atrasada o tardía.



En la Sentencia precitada, esta Corporación declaró exequibles los apartados demandados tras considerar que el artículo 141 parcialmente cuestionado no desconocía el artículo 13 Superior, en tanto que la comprensión correcta de esa prescripción indica que se aplica a todo tipo de pensiones, sin distinción alguna. Tal conclusión se derivó de la interpretación de la mencionada disposición, la cual se sustentó en las siguientes premisas argumentativas:

- (i) El reconocimiento de los intereses moratorios tiene por finalidad proteger a las personas de la tercera edad, quienes debido a su estado de salud o físico *“se encuentran imposibilitadas para obtener otra clase de recursos para su propia subsistencia o la de su familia”*, por lo que el pago tardío de sus mesadas pensionales puede comprometer su mínimo vital;
- (ii) El artículo 141 de la ley 100 de 1993 incorporó en el ordenamiento jurídico colombiano *“un mecanismo de liquidación para cancelar las pensiones atrasadas o en mora, sin que el legislador distinguiera en el tiempo o en el espacio a determinados grupos de pensionados”*;
- (iii) La disposición acusada no crea ningún tipo de distinciones entre pensionados o clases de pensiones. En realidad, el legislador estableció una distinción el tiempo, es decir, en el momento en el cual se produce la mora para efectos de saber cuál es la normatividad vigente con base en la que deberá hacerse su cálculo.
- (iv) La correcta interpretación del enunciado legal censurado *“advierte que a partir del 1º de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las pensiones a que se refiere la ley, esto es, las pensiones que tienen como origen el fenómeno laboral de la jubilación, la vejez, la enfermedad o la sustitución por causa de muerte, que se presente después de esa fecha, el pensionado afectado, sin importar bajo la vigencia de qué normatividad se le reconoce su condición de pensionado, tendrá derecho al pago de su mesada y sobre el importe de ella la tasa máxima del interés moratorio vigente. Es decir, la disposición acusada no distingue entre pensionados, pues, sólo alude al momento en el cual se produce la mora para efectos de su cálculo”*.

En este orden de ideas, señaló que las entidades de seguridad social *“están obligadas a indemnizar a los pensionados por la cancelación tardía de las mesadas pensionales atrasadas que se les adeudan, pues el artículo 53 de la Carta es imperativo y contundente al disponer que el Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones”*. De lo que se desprende que el artículo 141 de la ley 100 de 1993, desarrolló plenamente el artículo 53 Superior. En este sentido, expresó la Sala Plena que el artículo 141 no crea privilegios entre grupos de pensionados que adquirieron su derecho pensional bajo diferentes regímenes jurídicos:

*“[L]a Corte debe advertir que los pensionados siempre han tenido derecho al pago de intereses de mora cuando las mesadas correspondientes les han sido canceladas de manera atrasada; por lo tanto, **el derecho al reconocimiento y pago de los intereses de mora a los que hace referencia la norma en comento, es un derecho de todos los pensionados, sin importar el momento en el cual se haya***



reconocido el derecho al disfrute de la pensión respectiva". (Negrilla fuera del texto original)

La Sala Plena fijó la interpretación de la mencionada disposición, al precisar la manera en que debe entenderse, con el fin de que se mantuviera en el ordenamiento jurídico. Ese sentido corresponde con la idea de que todas las pensiones, legales o convencionales, son pasibles de causación de intereses de mora por su pago tardío. En realidad, el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 regula la forma de calcular esos réditos y no su existencia u origen³. La normatividad del sistema general de seguridad social tiene una expansión para todo tipo de pensiones, como sucede en este aspecto.

En sede de control concreto y siguiendo la *ratio decidendi* de la Sentencia C-601 de 2000, la Corte Constitucional ha reconocido el pago de los intereses moratorios ante la liquidación tardía de las mesadas pensionales. Por ejemplo, en la Sentencia T-635 de 2010, la Corte reiteró lo dicho en sede de control abstracto. Expresó que la regla jurisprudencial sentada en dicha providencia parte de considerar que los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 son aplicables a toda clase de pensiones, sean estas reconocidas por mandato legal, convencional o particular.

Más adelante, en la Sentencia **T-849A de 2013**, la Sala Séptima de Revisión conoció la acción de tutela instaurada por el Departamento del Chocó, contra el Juzgado Primero Administrativo de Quibdó, Chocó, en la cual solicitó la protección del derecho fundamental al debido proceso que estimó vulnerado con la sentencia proferida por la autoridad accionada, al declarar al ente territorial responsable administrativa y patrimonialmente por los perjuicios causados a los accionantes debido al pago tardío de las mesadas pensionales a su cargo. En esta oportunidad la Corte afirmó que *"aunque es cierto que la Corte Suprema de Justicia ha señalado que en casos como la materia de análisis no procede el pago de intereses moratorios, esta Corporación ha sostenido la tesis contraria, esta es que los intereses moratorios se causan por el pago tardío de cualquier pensión, independientemente de que hayan sido reconocidas con fundamento en normativa anterior a la Ley 100"*.

Finalmente, en la Sentencia de Unificación **SU-230 de 2015**, este Tribunal indicó que la Sentencia C-601 de 2000, *"fijó el alcance y contenido en la interpretación del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, estableciendo que los mismos proceden para todo tipo de pensión, sin importar la ley o el régimen mediante los cuales se causaron"*.

6.3.2.3. Así las cosas, la postura asumida por la Corte Constitucional, en sede de control abstracto y concreto, indica que las entidades encargadas del reconocimiento de prestaciones propias del sistema de seguridad social están obligadas a reconocer el pago de intereses por mora a los pensionados a quienes se les ha reconocido su derecho prestacional en virtud de un mandato legal, convencional o particular. Inclusive, ello sucede con independencia de que su derecho haya sido reconocido con fundamento en la Ley 100 de 1993 o una ley o régimen anterior, por lo que la moratoria se causa por el solo hecho de la

³ En Sentencia C-601 de 2001, se expresó *"de suerte que si ésta se produjo con anterioridad al 1° de enero de 1994, ésta se deberá calcular de conformidad con la normativa vigente hasta ese momento, esto es, el artículo 8° de la ley 10 de 1972, reglamentada por el artículo 6° del decreto 1672 de 1973, y eventualmente, por aplicación analógica de algunos criterios plasmados en el Código Civil colombiano, diferentes al artículo 1617 de la misma obra, y si la mora se produjo después de esa fecha su valor se deberá calcular con base en los lineamientos contenidos en el artículo 141 de la ley 100 de 1993."*



cancelación tardía de las mesadas pensionales, en aplicación del artículo 53 Superior.

Así mismo, la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 1° de octubre de 2014, radicación 46.786, M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz, estableció:

“Los intereses moratorios fueron creados por la Ley 100 de 1993 como una respuesta al incumplimiento de las entidades de seguridad social que estando obligadas al pago de las mesadas pensionales de que trata la Ley aludida, lo dilatan o retarden.

Lo que hace esta disposición es proteger a los pensionados frente a la mora en el pago de sus mesadas pensionales. Por ello resulta justo y equitativo que cuando las entidades de seguridad social incurren en mora o se retrasen en el pago de las mesadas, reparen los perjuicios ocasionados a los pensionados afectados, pagando además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el correspondiente pago”.

Es preciso advertir, que el señor **FRANCISCO JAVIER RENGIFO RIOS** presentó la solicitud de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en el año 2004 a la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.**, para dicha data había cumplido con los requisitos exigidos para ser beneficiario de la pensión de sobrevivencia, puesto que acreditó que era el esposo de la señora **LILIANA ELIZABETH GARCIA (QEPD)**, que no conocía herederos con mayor o igual derecho al que poseía ella, y que dependía económicamente de la misma.

Al respecto, cabe mencionar que la entidad accionada a través de oficio con radicado No. 0200001024655300 del 04 de agosto de 2004, procedió a negar el derecho pensional bajo el argumento de que no se había acreditado fidelidad. El 11 de noviembre de 2008, el fondo procede a responder frente a la Devolución de Saldos a favor del señor **FRANCISCO JAVIER RENGIFO**, devolución que no acepta mi prohijado.

En consecuencia, la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.** debe resarcir por la cancelación tardía de la pensión debido a la omisión del fondo en reconocer la prestación desde el momento en que se hizo exigible el derecho, por lo que los intereses moratorios se deben efectuar por los perjuicios causados a partir del 24 de mayo de 2004, día del fallecimiento de la señora **LILIANA ELIZABETH GARCÍA MORENO** esposa del señor **FRANCISCO JAVIER RENGIFO** y hasta el día que se realice efectivamente el pago.

PRUEBAS

1. DOCUMENTALES



Solicito del Despacho darle valor probatorio en favor de mi representada a los siguientes documentos:

1. Fotocopia simple de la cédula del señor **FRANCISCO JAVIER RENGIFO RIOS**.
2. Copia simple de Registro civil de nacimiento del señor **FRANCISCO JAVIER RENGIFO RIOS**.
3. Copia simple de Registro Civil de nacimiento de la señora **LILIANA ELIZABETH GARCIA MORENO**.
4. Copia simple de Registro Civil de Matrimonio de los señores **FRANCISCO JAVIER RENGIFO RIOS y LILIANA ELIZABETH GARCIA MORENO**.
5. Copia simple de Registro Civil de Defunción de la señora **LILIANA ELIZABETH GARCIA MORENO**, del día 24 de mayo de 2004.
6. Copia simple de la Relación Histórica de Movimientos Porvenir, correspondientes a la historia laboral de la señora **LILIANA ELIZABETH GARCIA MORENO**.
7. Copia simple de oficio con radicado 0200001024655300 del 04 agosto de 2004 remitido por el **FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR**, al señor **FRANCISCO JAVIER RENGIFO**, dónde se le niega por primera vez el derecho a la pensión de sobreviviente.
8. Copia simple de oficio con radicado 0200001061231800 del 11 noviembre de 2008 remitido por el **FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR**, al señor **FRANCISCO JAVIER RENGIFO**, dónde se le informa que, se le concede el derecho a la devolución de saldos, con ocasión a ser el único beneficiario.
9. Copia de declaración extra juicio del 04 de junio de 2019 del señor **FRANCISCO JAVIER RENGIFO RIOS**, en el cual se declara la convivencia entre los señores **FRANCISCO JAVIER RENGIFO RIOS y LILIANA ELIZABETH GARCIA MORENO** desde 05 de enero de 1998.
10. Copia de declaración extra juicio del 21 de febrero de 2020 de la señora **MARCELA RENGIFO RIOS**, en el cual se declara la convivencia entre los señores **FRANCISCO JAVIER RENGIFO RIOS y LILIANA ELIZABETH GARCIA MORENO** desde 05 de enero de 1998.
11. Copia de declaración extra juicio del 19 de febrero de 2020 del señor **CATEL BLANCO MARTINEZ NICOLAS**, en el cual se declara la convivencia entre los señores **FRANCISCO JAVIER RENGIFO RIOS y LILIANA ELIZABETH GARCIA MORENO** desde 05 de enero de 1998.
12. Fotocopia simple de derecho de petición radicado el 04 de junio de 2019 con número 0105646012776500.
13. Fotocopia respuesta oficio con radicado 0105646012776500 emitido por la entidad **PORVENIR** del 13 de junio de 2019.
14. Copia de recurso de reconsideración o revisión radicada el 04 de julio de 2019 con radicado 0105646012825000.
15. Copia de Derecho de Petición radicado bajo el número 0105646013337100 radicado el 10 de julio de 2020.
16. Copia respuesta a Derecho de petición emitida por **PORVENIR** con radicado 010564601.
17. Copia reclamación administrativa radicada a **PORVENIR** con radicado 0103880009838700 del 16 de marzo de 2021.
18. Copia respuesta enviada por **PORVENIR** el 05 de abril de 2021, con radicado de **PORVENIR** 0105646013337100

JURAMENTO ESTIMATORIO

Se estima la cuantía del presente proceso en un total de **TRESCIENTOS SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS MONEDA CORRIENTE**, los cuales están liquidados de la siguiente forma:

FECHAS		VALOR MESADA A RELIQUIDAR	OTROS		
FECHA INICIAL	2004-05-24		MESADAS ADICIONALES	INTERES DE MORA	INDEXAR
FECHA FINAL	2021-04-09		Jun-Dic		Sin INDEXAR
INT MORA DESDE	2004-08-04		\$ 358.000		

RESUMEN LIQUIDACION	VALOR MESADA ACUMULADA (A)	124.022.996,67
	SIN INDEXACION	0,00
	INTERES MORATORIO	236.778.927,23
	VALOR TOTAL	360.801.923,90

PERIODO	Días	% INCREMENTO IPC	X	VALOR MESADAS	VR MESADA ACUMULADA	IPC INICIAL DEL AÑO	INDEXACION	% INTERESES DE MORA	VR INTERESES DE MORA
2004-05	6	0,00%		71.600	71.600	55,17188	-	0,00%	-
2004-06	30	0,00%		716.000	787.600	55,50484	-	0,00%	-
2004-07	30	0,00%		358.000	1.145.600	55,48769	-	0,00%	-
2004-08	30	0,00%		358.000	1.503.600	55,50445	-	1,91%	28.656
2004-09	30	0,00%		358.000	1.861.600	55,66885	-	2,14%	39.818
2004-10	30	0,00%		358.000	2.219.600	55,66334	-	2,10%	46.585
2004-11	30	0,00%		358.000	2.577.600	55,81792	-	2,15%	55.365
2004-12	30	0,00%		716.000	3.293.600	55,98470	-	2,14%	70.426
2005-01	30	5,50%		377.690	3.671.290	56,44495	-	2,13%	78.360
2005-02	30	0,00%		377.690	4.048.980	57,02210	-	2,13%	86.212
2005-03	30	0,00%		377.690	4.426.670	57,46317	-	2,11%	93.195
2005-04	30	0,00%		377.690	4.804.360	57,71526	-	2,11%	101.333
2005-05	30	0,00%		377.690	5.182.050	57,95068	-	2,09%	108.426
2005-06	30	0,00%		755.380	5.937.430	58,18306	-	2,08%	123.267
2005-07	30	0,00%		377.690	6.315.120	58,21139	-	2,04%	128.928
2005-08	30	0,00%		377.690	6.692.810	58,21227	-	2,02%	134.932
2005-09	30	0,00%		377.690	7.070.500	58,46130	-	2,01%	142.408
2005-10	30	0,00%		377.690	7.448.190	58,59582	-	1,99%	147.914
2005-11	30	0,00%		377.690	7.825.880	58,66279	-	1,97%	154.488
2005-12	30	0,00%		755.380	8.581.260	58,70280	-	1,94%	166.684
2006-01	30	4,85%		396.008	8.977.268	59,02068	-	1,93%	173.130
2006-02	30	0,00%		396.008	9.373.276	59,40886	-	1,94%	182.254
2006-03	30	0,00%		396.008	9.769.284	59,82609	-	1,92%	187.434
2006-04	30	0,00%		396.008	10.165.292	60,09399	-	1,87%	189.966



2006-05	30	0,00%	396.008	10.561.300	60,29097	-	1,80%	190.159
2006-06	30	0,00%	792.016	11.353.316	60,47444	-	1,75%	199.141
2006-07	30	0,00%	396.008	11.749.324	60,72426	-	1,70%	199.717
2006-08	30	0,00%	396.008	12.145.332	60,96254	-	1,69%	205.705
2006-09	30	0,00%	396.008	12.541.340	61,13702	-	1,70%	212.838
2006-10	30	0,00%	396.008	12.937.348	61,04861	-	1,70%	219.823
2006-11	30	0,00%	396.008	13.333.356	61,19330	-	1,70%	226.552
2006-12	30	0,00%	792.016	14.125.372	61,33147	-	1,70%	240.009
2007-01	30	4,48%	413.749	14.539.121	61,80158	-	1,57%	228.107
2007-02	30	0,00%	413.749	14.952.870	62,52589	-	1,57%	235.011
2007-03	30	0,00%	413.749	15.366.619	63,28433	-	1,57%	241.514
2007-04	30	0,00%	413.749	15.780.368	63,85370	-	1,87%	294.899
2007-05	30	0,00%	413.749	16.194.117	64,04501	-	1,87%	302.631
2007-06	30	0,00%	827.498	17.021.615	64,12340	-	1,87%	318.095
2007-07	30	0,00%	413.749	17.435.364	64,22920	-	2,09%	364.579
2007-08	30	0,00%	413.749	17.849.114	64,14345	-	2,09%	373.231
2007-09	30	0,00%	413.749	18.262.863	64,19695	-	2,09%	381.882
2007-10	30	0,00%	413.749	18.676.612	64,20074	-	2,31%	430.970
2007-11	30	0,00%	413.749	19.090.361	64,50511	-	2,31%	440.517
2007-12	30	0,00%	827.498	19.917.859	64,82370	-	2,31%	459.612
2008-01	30	5,69%	437.291	20.355.151	65,50785	-	2,36%	480.736
2008-02	30	0,00%	437.291	20.792.442	66,49755	-	2,36%	491.064
2008-03	30	0,00%	437.291	21.229.734	67,03451	-	2,36%	501.391
2008-04	30	0,00%	437.291	21.667.025	67,51120	-	2,37%	513.488
2008-05	30	0,00%	437.291	22.104.316	68,14020	-	2,37%	523.851
2008-06	30	0,00%	874.583	22.978.899	68,72770	-	2,37%	544.578
2008-07	30	0,00%	437.291	23.416.191	69,05890	-	2,33%	545.956
2008-08	30	0,00%	437.291	23.853.482	69,19101	-	2,33%	556.151
2008-09	30	0,00%	437.291	24.290.774	69,05900	-	2,33%	566.347
2008-10	30	0,00%	437.291	24.728.065	69,29808	-	2,28%	564.973
2008-11	30	0,00%	437.291	25.165.357	69,49142	-	2,28%	574.964
2008-12	30	0,00%	874.583	26.039.939	69,79878	-	2,28%	594.946
2009-01	30	7,67%	470.832	26.510.771	70,21012	-	2,23%	591.876
2009-02	30	0,00%	470.832	26.981.603	70,79780	-	2,23%	602.388
2009-03	30	0,00%	470.832	27.452.435	71,15101	-	2,23%	612.900
2009-04	30	0,00%	470.832	27.923.266	71,37954	-	2,21%	618.239
2009-05	30	0,00%	470.832	28.394.098	71,38958	-	2,21%	628.664
2009-06	30	0,00%	941.663	29.335.761	71,34959	-	2,21%	649.513
2009-07	30	0,00%	470.832	29.806.593	71,32184	-	2,06%	612.993
2009-08	30	0,00%	470.832	30.277.425	71,35329	-	2,06%	622.676
2009-09	30	0,00%	470.832	30.748.256	71,27511	-	2,06%	632.359
2009-10	30	0,00%	470.832	31.219.088	71,18409	-	1,92%	599.798



2009-11	30	0,00%	470.832	31.689.920	71,13735	-	1,92%	608.844
2009-12	30	0,00%	941.663	32.631.583	71,19602	-	1,92%	626.935
2010-01	30	2,00%	480.248	33.111.832	71,68427	-	1,81%	598.410
2010-02	30	0,00%	480.248	33.592.080	72,27814	-	1,81%	607.089
2010-03	30	0,00%	480.248	34.072.328	72,45984	-	1,81%	615.769
2010-04	30	0,00%	480.248	34.552.577	72,79345	-	1,72%	595.541
2010-05	30	0,00%	480.248	35.032.825	72,86863	-	1,72%	603.819
2010-06	30	0,00%	960.497	35.993.322	72,95148	-	1,72%	620.374
2010-07	30	0,00%	480.248	36.473.570	72,92074	-	1,69%	614.770
2010-08	30	0,00%	480.248	36.953.818	73,00258	-	1,69%	622.865
2010-09	30	0,00%	480.248	37.434.067	72,90349	-	1,69%	630.960
2010-10	30	0,00%	480.248	37.914.315	72,83918	-	1,61%	610.779
2010-11	30	0,00%	480.248	38.394.563	72,98051	-	1,61%	618.515
2010-12	30	0,00%	960.497	39.355.060	73,45380	-	1,61%	633.988
2011-01	30	3,17%	495.472	39.850.532	74,12223	-	1,75%	698.993
2011-02	30	0,00%	495.472	40.346.004	74,56888	-	1,75%	707.684
2011-03	30	0,00%	495.472	40.841.477	74,76988	-	1,75%	716.375
2011-04	30	0,00%	495.472	41.336.949	74,85899	-	1,96%	811.118
2011-05	30	0,00%	495.472	41.832.421	75,07220	-	1,96%	820.840
2011-06	30	0,00%	990.944	42.823.365	75,31086	-	1,96%	840.285
2011-07	30	0,00%	495.472	43.318.838	75,41551	-	2,05%	890.035
2011-08	30	0,00%	495.472	43.814.310	75,39216	-	2,05%	900.215
2011-09	30	0,00%	495.472	44.309.782	75,62493	-	2,05%	910.395
2011-10	30	0,00%	495.472	44.805.254	75,76844	-	2,13%	953.718
2011-11	30	0,00%	495.472	45.300.726	75,87388	-	2,13%	964.265
2011-12	30	0,00%	990.944	46.291.671	76,19171	-	2,13%	985.358
2012-01	30	3,73%	513.953	46.805.624	76,74845	-	2,18%	1.020.112
2012-02	30	0,00%	513.953	47.319.578	77,21721	-	2,18%	1.031.313
2012-03	30	0,00%	513.953	47.833.531	77,31146	-	2,18%	1.042.515
2012-04	30	0,00%	513.953	48.347.484	77,42308	-	2,24%	1.081.559
2012-05	30	0,00%	513.953	48.861.437	77,65538	-	2,24%	1.093.056
2012-06	30	0,00%	1.027.907	49.889.344	77,71967	-	2,24%	1.116.051
2012-07	30	0,00%	513.953	50.403.297	77,70288	-	2,27%	1.143.909
2012-08	30	0,00%	513.953	50.917.251	77,73475	-	2,27%	1.155.573
2012-09	30	0,00%	513.953	51.431.204	77,95733	-	2,27%	1.167.237
2012-10	30	0,00%	513.953	51.945.157	78,08470	-	2,27%	1.180.551
2012-11	30	0,00%	513.953	52.459.111	77,97794	-	2,27%	1.192.231
2012-12	30	0,00%	1.027.907	53.487.017	78,04724	-	2,27%	1.215.593
2013-01	30	2,44%	526.494	54.013.511	78,27981	-	2,26%	1.220.350
2013-02	30	0,00%	526.494	54.540.005	78,62748	-	2,26%	1.232.245
2013-03	30	0,00%	526.494	55.066.499	78,78925	-	2,26%	1.244.141
2013-04	30	0,00%	526.494	55.592.992	78,98854	-	2,27%	1.260.277



2013-05	30	0,00%	526.494	56.119.486	79,20869	-	2,27%	1.272.212
2013-06	30	0,00%	1.052.988	57.172.474	79,39470	-	2,27%	1.296.083
2013-07	30	0,00%	526.494	57.698.968	79,43033	-	2,22%	1.280.812
2013-08	30	0,00%	526.494	58.225.461	79,49658	-	2,22%	1.292.499
2013-09	30	0,00%	526.494	58.751.955	79,72943	-	2,22%	1.304.187
2013-10	30	0,00%	526.494	59.278.449	79,52247	-	2,17%	1.288.145
2013-11	30	0,00%	526.494	59.804.943	79,35051	-	2,17%	1.299.586
2013-12	30	0,00%	1.052.988	60.857.930	79,55965	-	2,17%	1.322.468
2014-01	30	1,94%	536.708	61.394.638	79,94651	-	2,15%	1.322.282
2014-02	30	0,00%	536.708	61.931.346	80,45078	-	2,15%	1.333.841
2014-03	30	0,00%	536.708	62.468.054	80,76791	-	2,15%	1.345.400
2014-04	30	0,00%	536.708	63.004.761	81,13760	-	2,15%	1.355.742
2014-05	30	0,00%	536.708	63.541.469	81,53011	-	2,15%	1.367.291
2014-06	30	0,00%	1.073.416	64.614.885	81,60609	-	2,15%	1.390.389
2014-07	30	0,00%	536.708	65.151.592	81,72956	-	2,12%	1.383.018
2014-08	30	0,00%	536.708	65.688.300	81,89560	-	2,12%	1.394.411
2014-09	30	0,00%	536.708	66.225.008	82,00686	-	2,12%	1.405.804
2014-10	30	0,00%	536.708	66.761.716	82,14200	-	2,11%	1.406.830
2014-11	30	0,00%	536.708	67.298.423	82,25026	-	2,11%	1.418.139
2014-12	30	0,00%	1.073.416	68.371.839	82,46969	-	2,11%	1.440.759
2015-01	30	3,66%	556.351	68.928.190	83,00103	-	2,11%	1.455.160
2015-02	30	0,00%	556.351	69.484.541	83,95522	-	2,11%	1.466.905
2015-03	30	0,00%	556.351	70.040.893	84,44705	-	2,11%	1.478.651
2015-04	30	0,00%	556.351	70.597.244	84,90061	-	2,13%	1.501.354
2015-05	30	0,00%	556.351	71.153.595	85,12395	-	2,13%	1.513.186
2015-06	30	0,00%	1.112.703	72.266.298	85,21331	-	2,13%	1.536.849
2015-07	30	0,00%	556.351	72.822.649	85,37116	-	2,12%	1.540.676
2015-08	30	0,00%	556.351	73.379.000	85,78096	-	2,12%	1.552.447
2015-09	30	0,00%	556.351	73.935.352	86,39478	-	2,12%	1.564.217
2015-10	30	0,00%	556.351	74.491.703	86,98408	-	2,12%	1.581.287
2015-11	30	0,00%	556.351	75.048.054	87,50860	-	2,12%	1.593.097
2015-12	30	0,00%	1.112.703	76.160.757	88,05213	-	2,12%	1.616.717
2016-01	30	6,77%	594.016	76.754.773	89,18854	-	2,16%	1.655.076
2016-02	30	0,00%	594.016	77.348.789	90,32981	-	2,16%	1.667.885
2016-03	30	0,00%	594.016	77.942.805	91,18224	-	2,16%	1.680.694
2016-04	30	0,00%	594.016	78.536.822	91,63459	-	2,24%	1.758.413
2016-05	30	0,00%	594.016	79.130.838	92,10174	-	2,24%	1.771.713
2016-06	30	0,00%	1.188.032	80.318.870	92,54352	-	2,24%	1.798.312
2016-07	30	0,00%	594.016	80.912.887	93,02473	-	2,32%	1.873.232
2016-08	30	0,00%	594.016	81.506.903	92,72713	-	2,32%	1.886.984
2016-09	30	0,00%	594.016	82.100.919	92,67814	-	2,32%	1.900.736
2016-10	30	0,00%	594.016	82.694.935	92,62263	-	2,38%	1.965.498



2016-11	30	0,00%	594.016	83.288.952	92,72630	-	2,38%	1.979.616
2016-12	30	0,00%	1.188.032	84.476.984	93,11285	-	2,38%	2.007.854
2017-01	30	5,75%	628.172	85.105.156	94,06643	-	2,41%	2.050.483
2017-02	30	0,00%	628.172	85.733.328	95,01250	-	2,41%	2.065.618
2017-03	30	0,00%	628.172	86.361.501	95,45509	-	2,41%	2.080.752
2017-04	30	0,00%	628.172	86.989.673	95,90728	-	2,41%	2.095.344
2017-05	30	0,00%	628.172	87.617.845	96,12338	-	2,41%	2.110.475
2017-06	30	0,00%	1.256.344	88.874.189	96,23358	-	2,41%	2.140.737
2017-07	30	0,00%	628.172	89.502.362	96,18435	-	2,38%	2.126.175
2017-08	30	0,00%	628.172	90.130.534	96,31907	-	2,38%	2.141.097
2017-09	30	0,00%	628.172	90.758.706	96,35786	-	2,33%	2.113.206
2017-10	30	0,00%	628.172	91.386.878	96,37397	-	2,30%	2.099.535
2017-11	30	0,00%	628.172	92.015.050	96,54825	-	2,28%	2.097.055
2017-12	30	0,00%	1.256.344	93.271.395	96,91988	-	2,26%	2.109.099
2018-01	30	4,09%	653.864	93.925.259	97,52763	-	2,25%	2.116.715
2018-02	30	0,00%	653.864	94.579.123	98,21643	-	2,28%	2.160.290
2018-03	30	0,00%	653.864	95.232.988	98,45225	-	2,25%	2.144.974
2018-04	30	0,00%	653.864	95.886.852	98,90690	-	2,23%	2.141.370
2018-05	30	0,00%	653.864	96.540.717	99,15779	-	2,23%	2.152.276
2018-06	30	0,00%	1.307.729	97.848.446	99,31115	-	2,21%	2.166.428
2018-07	30	0,00%	653.864	98.502.310	99,18449	-	2,19%	2.157.568
2018-08	30	0,00%	653.864	99.156.174	99,30326	-	2,18%	2.162.983
2018-09	30	0,00%	653.864	99.810.039	99,46711	-	2,17%	2.165.064
2018-10	30	0,00%	653.864	100.463.903	99,58684	-	2,15%	2.161.791
2018-11	30	0,00%	653.864	101.117.768	99,70354	-	2,14%	2.162.171
2018-12	30	0,00%	1.307.729	102.425.497	100,00000	-	2,13%	2.180.876
2019-01	30	3,18%	674.657	103.100.154	100,59854	-	2,11%	2.171.232
2019-02	30	0,00%	674.657	103.774.811	101,17675	-	2,16%	2.239.718
2019-03	30	0,00%	674.657	104.449.468	101,61572	-	2,13%	2.221.271
2019-04	30	0,00%	674.657	105.124.126	102,11886	-	2,12%	2.230.183
2019-05	30	0,00%	674.657	105.798.783	102,44000	-	2,12%	2.246.548
2019-06	30	0,00%	1.349.315	107.148.098	102,71000	-	2,12%	2.271.043
2019-07	30	0,00%	674.657	107.822.755	102,94000	-	2,12%	2.283.250
2019-08	30	0,00%	674.657	108.497.412	103,03000	-	2,12%	2.301.747
2019-09	30	0,00%	674.657	109.172.070	103,26000	-	2,12%	2.316.059
2019-10	30	0,00%	674.657	109.846.727	103,43000	-	2,10%	2.306.905



2019-11	30	0,00%	674.657	110.521.384	103,54000	-	2,09%	2.313.907
2019-12	30	0,00%	1.349.315	111.870.699	103,80000	-	2,08%	2.329.084
2020-01	30	3,80%	700.294	112.570.993	104,24000	-	2,07%	2.328.295
2020-02	30	0,00%	700.294	113.271.287	104,94000	-	2,10%	2.374.418
2020-03	30	0,00%	700.294	113.971.582	105,53000	-	2,09%	2.377.265
2020-04	30	0,00%	700.294	114.671.876	105,70000	-	2,06%	2.362.789
2020-05	30	0,00%	700.294	115.372.170	105,36000	-	2,01%	2.320.698
2020-06	30	0,00%	1.400.589	116.772.759	104,97000	-	2,00%	2.340.452
2020-07	30	0,00%	700.294	117.473.053	104,97000	-	2,00%	2.354.488
2020-08	30	0,00%	700.294	118.173.347	104,96000	-	2,02%	2.388.649
2020-09	30	0,00%	700.294	118.873.642	105,29000	-	2,03%	2.409.802
2020-10	30	0,00%	700.294	119.573.936	105,23000	-	2,00%	2.393.459
2020-11	30	0,00%	700.294	120.274.230	105,08000	-	1,98%	2.377.455
2020-12	30	0,00%	1.400.589	121.674.819	105,48000	-	1,94%	2.359.414
2021-01	30	1,61%	711.569	122.386.388	105,91000	-	1,93%	2.356.214
2021-02	30	0,00%	711.569	123.097.957	105,91000	-	1,95%	2.396.766
2021-03	30	0,00%	711.569	123.809.526	105,91000	-	0,00%	-
2021-04	9	0,00%	213.471	124.022.997	105,91000	-	0,00%	-

COMPETENCIA

Es usted competente, Señor Juez, para conocer de la presente demanda, en consideración de la naturaleza del proceso, del domicilio de las partes y de la cuantía.

PROCEDIMIENTO

A la presente demanda debe dársele el trámite de un Proceso Ordinario de primera instancia, consagrado en el capítulo XIV del Código Procesal de Trabajo.

ANEXOS



1. Los enunciados en el acápite de pruebas documentales.
2. Documento de poder.

DECLARACION DE OBTENCION DE CORREO ELECTRONICO

En concordancia con el artículo 6 del Decreto 806 del 2020, y las disposiciones del Código General del Proceso, manifiesto que el correo electrónico de la parte demandada la obtuve de la página oficial del fondo de pensiones y Cesantías Porvenir, en la dirección <https://www.porvenir.com.co/notificaciones-judiciales>.

Dado lo anterior, me permito manifestar bajo la gravedad de juramento, que al momento de radicar esta demanda, se ha anexado en copia de la misma a la entidad demandada, de lo cual puede dar constancia la oficina de reparto de la ciudad de Buga.

En cuanto al correo electrónico del demandante, me permito informar que ha sido el suministrado por el poderdante.

NOTIFICACIONES

La demandada, recibe notificaciones al correo electrónico: notificacionesjudiciales@porvenir.com.co

El suscrito apoderado, recibe notificaciones en su despacho o a través de los siguientes correos electrónicos: hectorbueno@gmail.com o notificaciones@aljabogados.co

El demandante, recibe notificaciones al correo electrónico: franciscorenigiforios@gmail.com, en la dirección física en la carrera 10 número 20-29 de Guadalajara de Buga, Valle del Cauca.

Del señor Juez,

Atentamente,

HECTOR ERNESTO BUENO RINCON

T.P. 149.085 del C.S de la J.

C.C. 9.736.615 de Armenia.



Bueno y Compañía

Señor
JUEZ LABORAL DEL CIRCUITO
E.S.D

Ref. **PODER DE REPRESENTACION**

DEMANDANTE: FRANCISCO JAVIER RENGIFO RIOS

DEMANDADO: SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A

FRANCISCO JAVIER RENGIFO RIOS, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá, identificado con Cédula de Ciudadanía # 79.583.176, actuando en nombre propio, por medio del presente escrito, me permito conferir poder especial, amplio y suficiente al abogado **HECTOR ERNESTO BUENO RINCON**, mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía # 9.736.615 de Armenia, y Tarjeta Profesional #. 149.085 e. Adida por el Consejo Superior de la Judicatura, para que en mi nombre y representación inicie y lleve hasta su terminación **PROCESO LABORAL ORDINARIO DE PRIMERA INSTANCIA**, en contra de la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A** .identificada con NIT 800.144.331-3, representada legalmente por su Gerente General o por quien haga sus veces, para que se hagan las siguientes declaraciones y condenas:

I. DECLARATIVAS

1. Que se declare que el señor **FRANCISCO JAVIER RENGIFO RIOS**, tiene derecho al reconocimiento de la pensión de Sobrevivientes que dejo causada su esposa la señora **LILIANA ELIZABETH GARCIA MORENO**.

Consecuente con la anterior declaración, solicito que se profieran a cargo de la demandada y a favor del demandante, las siguientes:



Carrera 14 No. 9N-16 Oficina 531, Centro Comercial Mocawa Plaza
Teléfono 3104118434
hectorbueno@gmail.com



II. CONDENAS

Solicito que se condene a la parte demanda a: reconocer y pagar al demandante la pensión de Sobrevivientes desde la fecha del fallecimiento de su esposa la señora **LILIANA ELIZABETH GARCIA MORENO, es decir desde el 24 de Mayo de 2004.**

1. Solicito que se condene a la demandada a reconocer y pagar al demandante, los intereses moratorios que consagra el Artículo 141 de la ley 100 de 1993, igualmente desde el 24 de Mayo de 2004.
2. Que, en ejercicio de las potestades procesales de primera instancia, se condene a la demandada al pago de todo cuanto resulte probado a favor del demandante, **ULTRA Y EXTRA PETITA**.
3. Que se condene a la demandada al pago de las costas y agencias en derecho que genere este proceso.

Mi apoderado judicial, queda facultado para conciliar, transigir, sustituir, reasumir, tachar de falsos documentos y testigos, notificarse de cualquier acto procesal y las demás contempladas en el artículo 74 del C.G.P y aquellas inherentes al proceso y a la profesión, excepto recibir dineros provenientes del Fondo de Pensión y apertura de productos bancarios.

Ante mí,

FRANCISCO JAVIER RENGIFO RIOS
Cédula de Ciudadanía # 79.583.176

Acepto el poder.

HECTOR ERNESTO BUENO RINCON
Cédula de Ciudadanía # 9.736.615 de Armenia.
T. P. No. 149.085 del C. S. de la J.

NOTARÍA 5 DE BOGOTÁ D.C.
DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL
Artículo 2.2.6.1.2.4.1 del Decreto 1069 de 2015
En Bogotá D.C., República de Colombia, el 28-01-2020, en la Notaría Cinco (5) del Circuito de Bogotá D.C., compareció:
FRANCISCO JAVIER RENGIFO RIOS, identificado con CC/NUIP 40079583176, presentó el documento dirigido a... y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.

Firma autógrafa

Conforme al Artículo 18 del Decreto-Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y autorizó el tratamiento de sus datos personales.

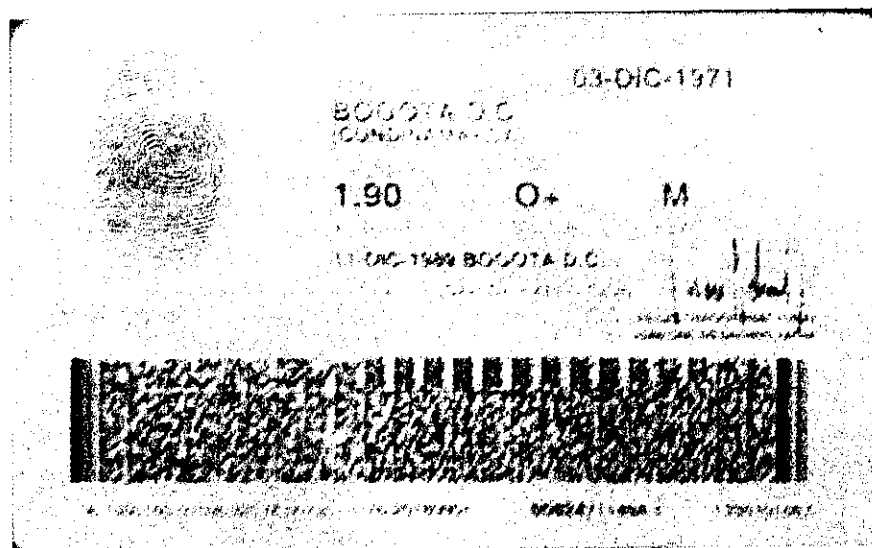
NANCY ARÉVALO PACHECO
Notaria cinco (5) del Circuito de Bogotá D.C. - Encargada

Consulte este documento en www.notariossegura.com.co
Número Único de Transacción: 5zsrdtwoj6q0 | 28/01/2020 - 11:58:41-017

55829

Carrera 14 No. 9N-16 Oficina 531, Centro Comercial Mocawa Plaza
Teléfono 3104118434
hectorbueno@gmail.com





711203

00983

OFICINA DE	NUMERO	NUMERO	CODIGO
BOGOTA DE	1008		

SECCION GENEERICA

PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO		NOMBRES							
RAMÍREZ - - - - -		RIVERA - - - - -		FRANCISCO JAVIER - - - - -							
SEXO		ESTADO CIVIL		FECHA DE NACIMIENTO		DÍA		MES		CÓDIGO AÑO	
Masculino - -		Soltero <input checked="" type="checkbox"/> Casado <input type="checkbox"/> Viudo <input type="checkbox"/> Separado <input type="checkbox"/>		03		Diciembre				1,974	
PAÍS DE NACIMIENTO		CÓDIGO		DEPARTAMENTO		CÓDIGO		MUNICIPIO		CÓDIGO	
Colombia				Cundinamarca				Bogotá			

SECCION ESPECIFICA

[illegible][illegible]

LEADS IN COLUMBIA FOR DANABANJO

RECONOCIMIENTO DE HIJO NATURAL

PARA EFECTO DEL ARTICULO SEGUNDO 1261 DE LA LEY 45 DE 1936. RECONOZCO AL NIÑO
A QUE SE REFIERE ESTA ACTA COMO MI HIJO NATURAL EN CUYA CONSTANCIA FIRMO

FIRMA DEL PADRE QUE HACE EL RECONOCIMIENTO

FIRMA DEL FUNCIONARIO ANTE QUIEN SE HACE EL RECONOCIMIENTO

NOTAS:

20 OCT. 1972
25 NOV. 1978

Corregida y reemplazada por el serial 4 41671379, según solicitud
por carta en el sentido que la fecha de inscripción es 1 enero
1.972. 29 septiembre 2008

- 8 JUN. 2004

- 5 SET. 2005

- 6 SET. 2005

NOTARIA 8ª DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C.

LA PRESENTE COPIA FUE TOMADA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA NOTARIA. SE EXPIDE A SOLICITUD DEL INTERESADO PARA
DEMOSTRAR PARENTESCO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 115 DE DECRETO 1260 DE 1970 Y 1er. DECRETO 278 DE 1972. ESTE
REGISTRO NO TIENE FECHA DE VENCIMIENTO. ARTICULO 2 DECRETO 2180 DE 1.983.

SERIAL N°: 00035124

BOGOTA D.C. - 2020-02-14 (AAAA-MM-DD)

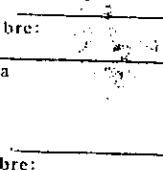

CON DESTINO AL INTERESADO

William Urrea Rocha
NOTARIO OCHO (E) DE BOGOTÁ D.C.

Notaría, Registraduría Municipal, Alcaldía, Corregimiento, etc.	Municipio	Código
N OTARIA SEGUNDA	BOGOTA D.E.	1002

SECCION GENERAL							
Primer apellido	Segundo apellido	Nombres					
GARCIA	MORENO	LILIANA ELIZABETH					
Masculino o femenino	Masculino <input type="checkbox"/>	Femenino <input checked="" type="checkbox"/>	Fecha de nacimiento	Día	Mes	Año	
Femenino				2	octubre	1975	
País	Departamento	Municipio					
COLOMBIA	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.E.					

SECCION ESPECIFICA			
Clínica, hospital, dirección de la casa, vereda, corregimiento, donde ocurrió el nacimiento			Hora
CLINICA PALERMO			9.55 a.m.
Clase de certificación presentada (médica, acta parroquial, etc.)	Nombre del profesional que certificó el nacimiento	No. de licencia	
certificado medico	Dr. GUTIERREZ	1458	
Apellidos	Nombres	Edad (años cumpl.)	
MORENO LEIVA	ANA ELIZABETH	31	
Identificación	Nacionalidad	Profesión u oficio	
c.c.# 41.320.829 de Bogotá	Colombiana	Empleada	
Apellidos	Nombres	Edad (años cumpl.)	
GARCIA GARZON	ALFONSO GILBERTO	39	
Identificación	Nacionalidad	Profesión u oficio	
c.c.# 2.862.018 de Bogotá	Colombiana	Empleado	

Identificación	c.c.# 41.320.829 de Bogotá		
Dirección postal	calle 5a.# 76-41 Bogotá		
Identificación	Nombre:	<i>Elizabeth de Garcia</i>	
Domicilio (Municipio)	Nombre:	ANA ELIZABETH MORENO DE GARCIA	
Identificación	Firma		
Domicilio (Municipio)	Nombre:		
Identificación	Firma		
Domicilio (Municipio)	Nombre:		
FECHA EN QUE SE SIENTA EL REGISTRO			
Día	Mes	Año	
31	octubre	1975	

N2

NOTARIA SEGUNDA (2ª) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.

Leovedis Elías Martínez Durán

Notario Segundo de Bogotá

NIT: 19.244.118-7

LA PRESENTE COPIA ES FIEL Y AUTÉNTICA TOMADA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA NOTARIA, SE EXPIDE A SOLICITUD DEL INTERESADO PARA DEMOSTRAR PARENTESCO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 115 DEL DECRETO 1260 DE 1970-1. DECRETO 278 DE 1972. ESTE REGISTRO NO TIENE FECHA DE VENCIMIENTO. ARTICULO 2 DECRETO 2180 DE 1983.

14 FEB. 2020

[Handwritten signature]

a que se refiere esta Acta como mi hijo natural, en constancia de lo cual firmo:

Firma del padre que hace el reconocimiento

Firma del funcionario ante quien se hace el reconocimiento

NOTAS:

NOTARIA SEGUNDA DEL
CÍRCULO DE BOGOTÁ

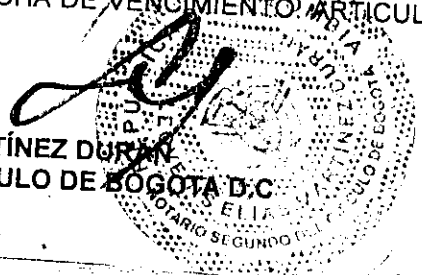
N2

NOTARIA SEGUNDA (2ª) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.
Leovedis Elías Martínez Durán
Notario Segundo de Bogotá
NIT: 19.244.118-7

LA PRESENTE COPIA ES FIEL Y AUTÉNTICA TOMADA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA NOTARIA, SE EXPIDE A SOLICITUD DEL INTERESADO PARA DEMOSTRAR PARENTESCO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 116 DEL DECRETO 1260 DE 1970-1. DECRETO 278 DE 1972. ESTE REGISTRO NO TIENE FECHA DE VENCIMIENTO ARTICULO 2 DECRETO 2180 DE 1983.

14 FEB. 2020

LEOVEDIS ELIAS MARTÍNEZ DURÁN
NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.



REPUBLICA DE COLOMBIA
REGISTRO CIVIL

Superintendencia de
Notariado y Registro

REGISTRO DE MATRIMONIOS

2368858 64

FECHA EN QUE SE SIENTA ESTE REGISTRO		
1 Día	2 Mes	3 Año
31	MAYO	2004

OFICINA DE REGISTRO	4 Clase (Notaria, Alcaldía, Inspección, etc.)	5 Código	6 Municipio y departamento, Intendencia o Comisaría
	NOTARIA TREINTA Y DOS	9795	BOGOTA D.C., CUNDINAMARCA

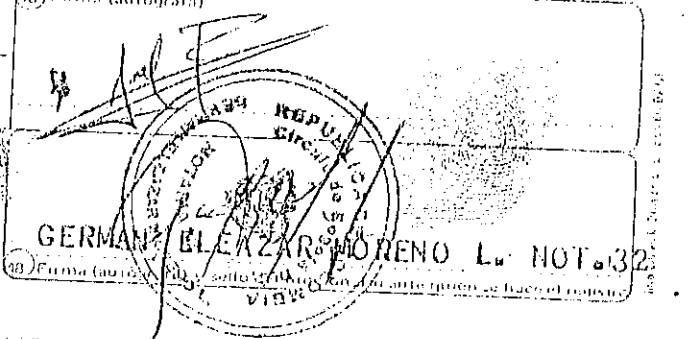
DATOS DEL MATRIMONIO	7 País	8 Depto., Int. o Comisaría	9 Municipio
	Lugar de celebración	CUNDINAMARCA-	
	10 Clase de matrimonio	BOGOTA D.C.	
	11 Nombre del matrimonio a registrar	/ MARIA /	
	12 Nombre del matrimonio a registrar	/ LUIS ALBERTO /	
	13 Día	14 Mes	15 Año
	28	SEPTIEMB	2002
	16 Clase	17 Número	18 Notaría
	Acta parroquial	631	
	19 Acta de protocolización		

DATOS DEL CONTRAYENTE	19 Primer apellido	20 Segundo apellido	21 Nombres
	RENGIFO	RIOS	FRANCISCO JAVIER
	22 Día	23 Mes	24 Año
	04	DICIEMBRE	1971
	25 Clase	26 Número	27 Lugar
	T.1	79.583.176	BOGOTA
	28 Oficina	29 Estado civil anterior	
		Soltero <input checked="" type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/>	
		Viudo <input type="checkbox"/> Divorciado <input type="checkbox"/> Espectante <input type="checkbox"/>	
		30 Número de registro	

DATOS DEL CONTRAYENTE	30 Primer apellido	31 Segundo apellido	32 Nombres
	GARCIA	MORENO	LILIANA ELIZABETH
	33 Día	34 Mes	35 Año
	02	OCTUBRE	1975
	36 Clase	37 Número	38 Lugar
	T.1	52.159.156	SANTAFE
	39 Oficina	40 Estado civil anterior	
		Soltero <input checked="" type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/>	
		Viudo <input type="checkbox"/> Divorciado <input type="checkbox"/> Espectante <input type="checkbox"/>	
		41 Número de registro	

PADRES DEL CONTRAYENTE	42 Nombres y apellidos del padre	43 Nombres y apellidos de la madre
	HEMEL ANTONIO RENGIFO	LILIA RIOS
PADRES DEL CONTRAYENTE	44 Nombres y apellidos del padre	45 Nombres y apellidos de la madre
	ALFONSO GARCIA GARZON	ELIZABETH MORENO LEYVA

DENUNCIANTE	46 Nombres y apellidos	47 Firma (autógrafa)
	FRANCISCO JAVIER RENGIFO RIOS	
	48 Identificación (clase y número)	49 Firma (autógrafa)
	CC.No. 79.583.176 DE BOGOTA!	
	MARTHA	



Forma DANE IP20-0 X/79

ORGANIZACION ELECTORAL
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

GAVIRIA

REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION

465

Indicativo Serial 5510712

Datos de la oficina de registro									
Clase de oficina:	Registraduria	Notaria	X	Consulado		Corregimiento		Insp. de Policia	
Pais - Departamento - Municipio - Corregimiento e/o Inspección de Policia									
COLOMBIA CUNDINAMARCA BOGOTA D.C. NOTARIA 32									

Datos del inscrito	
Apellidos y nombres completos	
GARCIA MORENO LILIANA ELIZABETH	
Documento de identificación (Clase y número)	Sexo (en Letras)
C.C. No. 52.159.756 DE SANTA FE DE BOGOTA	FEMENINO

Datos de la defunción	
Lugar de la Defunción: Pais - Departamento - Municipio - Corregimiento e/o Inspección de Policia	
COLOMBIA CUNDINAMARCA BOGOTA D.C.	
Fecha de la defunción	Hora
Año 2004 Mes 05 Dia 24 19:05 PM	Número de certificado de defunción A- 2055083
Juzgado que profiere la sentencia	Presunción de muerte
	Año Mes Dia
Documento presentado	Nombre y cargo del funcionario
Autorización judicial <input type="checkbox"/> Certificado Médico <input checked="" type="checkbox"/>	CLAUDIA LILIANA ACOSTA C. R.M. No. 52054889

Datos del denunciante	
Apellidos y nombres completos	
EDGAR DAVID REGINO H.	
Documentos de identificación (Clase y número)	Firma
C.C. No. 15.030.154 DE LORICA/ CORDOBA	

Primer testigo	
Apellidos y nombres completos	
Documentos de identificación (Clase y número)	
Firma	

Segundo testigo	
Apellidos y nombres completos	
Documentos de identificación (Clase y número)	
Firma	

Fecha de inscripción		Nombre y firma del funcionario que autoriza	
Año 2004 Mes 05 Dia 25	GERMAN ELIZABETH MORENO	NOT. 32	
ESPACIO PARA NOTAS			
PADRES : ALFONSO GARCIA / ELIZABETH MORENO DE GARCIA			

ES FIEL COPIA TOMADA DE SU ORIGINAL
(ARTICULO 114 Y 115 DECRETO 1260/70)
BOGOTA D.C.
ESTE REGISTRO CIVIL TIENE VALIDEZ PERMANENTE

LUIS GUILLERMO TELLO FLOREZ
SECRETARIO DELEGADO PARA COPIAS
(DECRETO 1534 DE 1989)
NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C.

ORIGINAL PARA LA OFICINA DE REGISTRO

đó là hay và

Cédula 52159756
Dirección CR 69 B 24 B 56 IN 1 AP 201
Estado Afiliado PRESTACION_DEFINIDA
Fecha Afiliación 2001/08/01

52159756
CR 69 B 24
PRESTACI
2001/08/01

Nombre
Ciudad
SubEstado
Fecha Efi

Nombre	LILIANA ELIZABETH GARCIA MORENO
Ciudad	BOGOTÁ D.C.
SubEstado Afiliado	SOBREV_DEV_SALDO
Fecha Efectividad Afiliación	2001/08/02

Numero Cuenta
Departamento
Fecha Generación
Tipo de Vinculación

1521805
BOGOTA
2019/06/13

Fecha Movimiento	Periodo Pago	Nit Pago	Razon Social	Aporte Obligatorio	Comision	FSP	FGPM	Vol. Afiliado	Vol. Empleador	Alt. Riesgo	Sancion	Fondo
2001/09/06	200108	890212212	MULTIEMPLEOS S.A.	86,074	30,126	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2001/10/08	200109	890201881	AVIDESA MAC POLLO S.A.	14,900	5,240	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2001/10/04	200109	890212212	MULTIEMPLEOS S.A.	52,889	18,511	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2001/11/09	200110	890201881	AVIDESA MAC POLLO S.A.	48,800	17,100	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2001/12/10	200111	890201881	AVIDESA MAC POLLO S.A.	56,667	19,833	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2002/01/10	200112	890201881	AVIDESA MAC POLLO S.A.	43,700	15,300	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2002/02/08	200201	890201881	AVIDESA MAC POLLO S.A.	60,200	21,100	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2002/03/08	200202	890201881	AVIDESA MAC POLLO S.A.	45,900	16,100	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2002/04/08	200203	890201881	AVIDESA MAC POLLO S.A.	100,000	35,000	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2002/05/09	200204	890201881	AVIDESA MAC POLLO S.A.	101,400	35,500	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2002/06/12	200205	890201881	AVIDESA MAC POLLO S.A.	56,963	19,937	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2002/07/09	200206	890201881	AVIDESA MAC POLLO S.A.	75,079	26,277	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2002/07/12	200206	890201881	AVIDESA MAC POLLO S.A.	107	37	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2002/08/09	200207	890201881	AVIDESA MAC POLLO S.A.	32,963	11,537	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2002/08/31	200208	0	Comisión Cesante	(238)	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2002/09/30	200209	0	Comisión Cesante	(333)	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2002/10/31	200210	0	Comisión Cesante	(244)	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado

Fecha Movimiento	Período Pago	Nit Pago	Razon Social	Aporte Obligatorio	Comision	FSP	FGPM	Vol. Afiliado	Vol. Empleador	Alt. Riesgo	Sancion	Fondo
2003/07/25	200210	0	Reversión Impuesto del 3 X 1000	1	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2002/11/30	200211	0	Comisión Cesante	(151)	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2002/12/31	200212	0	Comisión Cesante	(883)	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2003/07/25	200212	0	Reversión Impuesto del 3 X 1000	3	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2003/01/31	200301	0	Comisión Cesante	(767)	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2003/07/25	200301	0	Reversión Impuesto del 3 X 1000	2	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2003/02/28	200302	0	Comisión Cesante	(452)	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2003/05/28	200302	0	Reversión Impuesto del 3 X 1000	1	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2003/06/09	200305	800170585	INCUBADORA ANDINA S.A.	4,360	1,320	0	220	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2003/07/07	200306	800170585	INCUBADORA ANDINA S.A.	33,180	9,960	0	1,660	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2003/08/15	200307	800170585	INCUBADORA ANDINA S.A.	33,180	9,960	0	1,660	0	0	0	134	Pen. Obli. Moderado
2003/09/05	200308	800170585	INCUBADORA ANDINA S.A.	33,180	9,960	0	1,660	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2003/10/06	200309	800170585	INCUBADORA ANDINA S.A.	33,180	9,960	0	1,660	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2003/11/10	200310	800170585	INCUBADORA ANDINA S.A.	33,180	9,960	0	1,660	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2003/12/05	200311	800170585	INCUBADORA ANDINA S.A.	28,800	8,640	0	1,440	0	0	20	0	Pen. Obli. Moderado
2003/12/31	200312	0	Comisión Cesante	(501)	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2004/01/31	200401	0	Comisión Cesante	(793)	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2004/05/07	200404	860007336	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	36,403	10,921	0	5,461	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2004/06/07	200405	860007336	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	91,008	27,302	0	13,652	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2008/11/11	200811	0	Devolución Saldo por vejez	(2,211,003)	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado

Resumen de saldos con rendimientos

Fecha de Generación	Capital	Rendimientos	Saldo Total
13-JUN-19	1,102,267	(1,102,267)	0

2733/

CALLE 30 NO. 86 CASA 39		BOGOTÁ		0200001024655300 CON COPIA		110	
RECEPCIÓN DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS		CONJUNTO RESIDENCIAL SABANALARA		UNO		120	
1		2		3		4	
5		6		7		8	
9		10		11		12	

Bogotá, D.C. 04 AGO 2004



RADICADO

0200001024655300

Señor

FRANCISCO JAVIER RENGIFO RÍOS

Conjunto Residencial Sabanalara
Uno

CALLE 30 NO. 86 - 69 CASA 39

BOGOTÁ - D.C.

PORTERIA DEBE

REFERENCIA:

Solicitud Pensional No. 8061

Afiliado: LILIANA ELIZABETH

MORENO

C.C.:

52.159.756

N.T.:

NT

Respetada Señora:

La Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., con ocasión de su solicitud de pensión de sobrevivencia y auxilio funerario, se permite manifestarle que una vez adelantado el estudio de su solicitud pensional encuentra que no se acreditaron los requisitos legales previstos para el otorgamiento de la prestación. Lo anterior se sustenta en las siguientes razones:

1. El artículo 1° de la Ley 860 de 2004, por la cual se reformó el artículo 46 de la Ley 100 de 1.993 (aplicable por remisión expresa del artículo 73 de la misma Ley), dispone como requisitos para acceder a la pensión de sobrevivencia los que se transcriben a continuación:

Artículo 1°. El artículo 39 de la Ley 100 quedará así:

Artículo 39. Requisitos para obtener la pensión de invalidez. Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea declarado inválido y acredite las siguientes condiciones:

1. Invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración y su fidelidad de cotización para con el sistema sea al menos del veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez.

2. Invalidez causada por accidente: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma, y su fidelidad (de cotización para con el sistema sea al menos del veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez. (subrayas ajenas al texto)

2. Al consultar nuestro sistema observamos que la señora LILIANA ELIZABETH MORENO no cumplió con el requisito de fidelidad para acceder a la pensión de sobrevivencia y auxilio funerario, por causa de enfermedad, exigido por la reforma pensional, el cual consiste en cumplir con un 20% de fidelidad de cotización al sistema. Según la norma anteriormente transcrita éste corresponde al tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió los 20 años de edad (02 de octubre de 1995) y la fecha de su fallecimiento (24 de mayo de 2004), que para el caso en estudio - contando todos los periodos cotizados a los fondos de pensiones obligatorias administrados por PORVERNIR S.A., se llegó a un 16.35% de fidelidad al haber cotizado 509 días.
3. Se aclara que el rechazo del auxilio funerario se debe a que el artículo 18 del Decreto 1889 de 1994 (reglamentario de la Ley 100 de 1993 y vigente para los términos de auxilio funerario) establece que para ser acreedor al pago del auxilio funerario previsto por los artículos 51 y 86 de la Ley 100 de 1993, es necesario que se hayan producido las cotizaciones que darían derecho a la pensión de sobrevivencia, y tal como se ha manifestado en el presente caso no se originó el derecho a dicha pensión porque no se cumplió el requisito de cotización de fidelidad al Sistema de Seguridad Social en Pensiones.
4. Dado que los requisitos legales no se encuentran acreditados en los términos anteriormente descritos, Porvernir S.A. rechaza la solicitud de pensión de sobrevivientes y auxilio funerario.
5. En lo que respecta al saldo acumulado en la cuenta individual de ahorro pensional de la afiliada fallecida (así como su bono pensional - si a él tiene derecho -), le comunico que para su devolución debe presentar la sentencia o escritura pública proferida dentro del respectivo trámite de sucesión en la que se incluya a todos los beneficiarios con derecho. Para ello, tal valor deberá informarse al momento de la apertura del correspondiente trámite de sucesión.

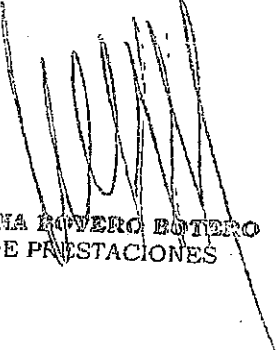
Lo anterior, debido a que de acuerdo con lo establecido en el numeral 7 del artículo 127 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, aplicable a las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones por expresa remisión del literal L del artículo 14 del Decreto 656 de 1994, la entidad en la cual estén

depositados los dineros ahorrados por el causante, puede a su juicio pagar el saldo de dicha cuenta, cuando éste no exceda del límite que se determine de conformidad con el reajuste anual ordenado por el artículo 29 del Decreto 2349 de 1965, al cónyuge sobreviviente, o a los herederos, o a uno y otro conjuntamente, según el caso, sin necesidad de juicio de sucesión. (Se resalta).

Así las cosas, considerando que se trata de una facultad y no de una obligación, PORVENIR S.A. por razones de seguridad exige la correspondiente sentencia o escritura pública proferidas dentro del proceso de sucesión, como requisito para devolver los saldos del afiliado fallecido, estando legalmente facultada para ello, sobre todo si se tiene en cuenta que el dinero depositado en las cuentas individuales de ahorro pensional no pertenece a la Administradora sino a sus afiliados.

Finalmente es conveniente informarle que la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías PORVENIR S.A. es una Sociedad Anónima de Nacionalidad Colombiana constituida mediante Escritura Pública No. 5307 de octubre 22 de 1991 emitida por la Notaría 23 de Circulo Notarial de Bogotá, con autorización de funcionamiento otorgada mediante Resolución 3970 de octubre 30 de 1991 proferida por la Superintendencia Bancaria de Colombia. Por lo tanto, PORVENIR S.A. no es una entidad de naturaleza pública y sus decisiones no son actos administrativos susceptibles de recursos por la vía gubernativa, lo anterior sin perjuicio de que los afiliados y sus beneficiarios puedan presentar los documentos y pruebas legalmente pertinentes que permitan la reconsideración de su solicitud si existe fundamento para ello.

Atentamente,


MARÍA LORENA ROVERO BOTERO
DIRECTORA DE PRESTACIONES
MLBB /JPRM

579/

Bogotá, D.C.,

11 NOV. 2008

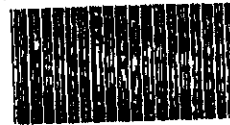
Señor

FRANCISCO JAVIER RENGIFO RIOS

Calle 30 No. 86 A - 69. Casa 39

Bogotá, D.C.

Radicado - Porvenir S.A.



0200001061231800

Devolucion de Saldos
Ref Rad. Porvenir N.A.
Afiliado: LILIANA GARCIA
C.C. 52.159.756
T.N. N.A.
COR - BEN

Apreciado Señor:

Reciba un cordial saludo de Porvenir S.A. Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías.

En respuesta a su solicitud citada en la referencia, atentamente le manifiesto que esta Sociedad Administradora giró con destino a la cuenta bancaria presentada por usted del Banco Bancolombia, el porcentaje abajo indicado sobre el saldo existente en la cuenta individual de ahorro pensional de la señora Liliana Garcia (q.e.p.d.)

Así entonces la distribución de los saldos se efectuaron de la siguiente manera:

NOMBRES	PARENTESCO	PORCENTAJE
FRANCISCO RENGIFO	ESPOSO	100

En lo que respecta al bono pensional me permito informarle que el afiliado no cumplió los requisitos exigidos en el literal a del artículo 115 de la ley 100 de 1993 (150 semanas antes del traslado de régimen) para tener derecho al reconocimiento del bono pensional.

Cualquier información adicional gustosamente será atendida por esta Dirección.

Cordialmente,

DIRECCION DE PRESTACIONES PORVENIR S.A.

Johan M.

C.C. Dirección de Prestaciones
Archivo y Correspondencia
Exp. 8062

REPUBLICA DE COLOMBIA
NOTARIA QUINTA DEL CIRCULO DE BOGOTA, D.C.
ACTA DECLARACIÓN CON FINES EXTRAPROCESALES
DECRETOS 1557 Y 2282 DE 1989
NUMERO: 874

NOTARIA 5^a

En la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, Departamento de Cundinamarca, República de Colombia, 4 de Junio de 2019, ante mi NANCY AREVALO PACHECO, NOTARIA 5 (E) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, Compareció: RENGIFO RIOS FRANCISCO JAVIER identificado con C.C. No. 79583176, mayor de edad, de estado civil Casado con sociedad conyugal vigente, profesión u ocupación Empleado, con domicilio en la Calle 137 A #73-27 CASA 57 de Bogotá, con el fin de rendir DECLARACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO DE CONFORMIDAD CON LOS DECRETOS 1.557 Y 2.282 DE 1.989 ARTICULO 1º NUMERAL 130 y manifestó:

PRIMERO: Mis nombres y apellidos son como han quedado dichos y escritos, de las condiciones civiles y personales antes anotadas.-
La presente declaración que consta en esta acta, se realiza bajo la gravedad de juramento y contiene la explicación de las razones de este testimonio y conforme a la ley versa sobre hechos personales, que como declarante realizo o de los cuales tengo conocimientos.

SEGUNDO: DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO lo siguiente:

Manifiesto que conviví con la señora LILIANA ELIZABETH GARCÍA MORENO, quien en vida se identifico con la C.C. # 52159756, por más de 5 años, conformando una comunicada de vida permanente y singular, compartiendo techo, lecho y mesa desde el 5 de enero de 1998, en la dirección Carrera 72 B # 5 B - 81 Interior 2 (Barrio Mandalay) de la ciudad de Bogotá, hasta la fecha de nuestro matrimonio católico, realizado el 28 de Septiembre de 2002 en la Parroquia San Alfonso María Ligorio de la ciudad de Bogotá, Carrera 28 # 39-27. Una vez casados, establecimos nuestro hogar en la dirección Calle 21 # 88 A - 49, casa 39, Barrio Hayuelos, de la ciudad de Bogotá; donde compartimos vida matrimonial católica hasta el día de su muerte, ocurrida el 24 de mayo de 2004. -----

ESTA DECLARACION SE RINDE, PARA PRESENTARLA A QUIEN INTERESE, PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES.

TERCERO: Manifiesto que he leído lo que voluntariamente he declarado ante el NOTARIO, lo he hecho cuidadosamente y no tengo ningún reclamo, ni nada que aclarar, corregir y/o enmendar; Por lo tanto lo otorgo con mi FIRMA dado que es real a lo solicitado al señor NOTARIO.

No siendo otro el objeto de la presente diligencia se termina y se firma en constancia y como prueba de lo anteriormente manifestado.

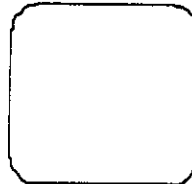
PARÁGRAFO PRIMERO: El Notario ha advertido previa y expresamente a la persona que voluntariamente realiza esta declaración, en ejercicio de los principios jurídicos del control de legalidad que las leyes le imponen, el de la rogación notarial y el de la inmediación; que las personas son libres conforme a la constitución política de Colombia, de manifestar, expresar, declarar, espontáneamente lo que a bien tengan, pero que esta declaración se debe hacer conforme a la ley, el orden público y las buenas costumbres. REALIZADA ESTA OBSERVACIÓN y ASÍ ACEPTADA SE PROCEDE A SU FIRMA POR PARTE DEL DECLARANTE.


PARÁGRAFO SEGUNDO: El Notario ha explicado al igual que sus funcionarios, al usuario que esta persona acude libre y espontáneamente ante el Notario en ejercicio del principio de rogación, y que todo derecho para su reconocimiento basta la simple afirmación que haga el particular, ante una entidad (Decreto 2150 de 1995, Instrucción Administrativa No. 12 de mayo 7 de 2004), y que por lo tanto esta declaración extra proceso se autoriza.

Esta declaración se hace por solicitud del compareciente. Ley 962 del 8 de julio de 2005.

IMPORTANTE: LEA ATENTAMENTE SU DECLARACIÓN. UNA VEZ FUERA DE LA NOTARIA NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI CORRECCIONES, NI RECLAMOS.
(RESOLUCIÓN 0691 DEL 24 DE ENERO DE 2019).

Huella Índice Derecho




RENGIFO RIOS FRANCISCO JAVIER
C.C. 79583176


NANCY AREVALO PACHECO
NOTARIA 5 (E) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ

Notaria del Círculo de Bogotá

45

SNR SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO
& REGISTRO
la gaceta de la fe pública



MINISTERIO DE JUSTICIA



GOBIERNO DE COLOMBIA

CARLA PATRICIA OSPINA RAMÍREZ

Nit 32.703.706-5

ACTA DE DECLARACIÓN JURAMENTADA CON FINES EXTRAPROCESALES (DECRETO 1557- 1989 ART 1) 0240

ANTE MÍ : TERESA CARVAJAL BERBESI =====
EXPEDIDA EL DÍA : 21 DE FEBRERO DE 2020=====
DECLARANTE : MARCELO RENGIFO RÍOS=====
IDENTIFICACIÓN : C.C. 79.498.173 DE BOGOTÁ D.C.=====
EDAD : 50 AÑOS =====
TELÉFONO : 3114812970. =====
DIRECCIÓN : CALLE 12 C NO 71 C 31 TORRE 2 APT 204. =====
PROFESIÓN : COMUNICADOR SOCIAL PERIODISTA. =====
ESTADO CIVIL : CASADO=====

DECLARACIÓN CON DESTINO A: PORVENIR=====

Solicito a la señora notaria cuarenta y cinco (45) (E) del círculo de Bogotá D.C. autorice la presente declaración bajo la gravedad de juramento a sabiendas de las implicaciones legales que acarrea jurar en falso como lo indica el Artículo 442 del Código Penal, que lo que aquí se plasma es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, en los siguientes términos: =====

DECLARO: Que conocí de vista, trato y comunicación por espacio de Veinte (20) años a la señora LILIANA ELIZABETH GARCÍA MORENO (Q.E.P.D) quien en vida se identificaba con la cedula de ciudadanía número 52.159.756 de Bogotá D.C., por dicho conocimiento sé y me consta que convivió compartiendo techo, lecho y mesa de manera permanente e ininterrumpida con el señor FRANCISCO JAVIER RENGIFO RÍOS quien se identifica con cedula de ciudadanía número 79.583.176 de Bogotá D.C, quienes Vivían en estado civil unión libre desde el cinco (05) de Enero del año 1998 en la dirección CRA 72 B NO 5 B 81 INT 2 BARRIO MANDALAY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ hasta la fecha de matrimonio conviviendo en la dirección CALLE 21 NO 88 A 29 CASA 39 BARRIO HAYUELOS, el día Veintiocho (28) de Septiembre del dos mil dos (2002), fecha en la cual contrajeron matrimonio, y finalizo el día veinticuatro (24) de Mayo de Dos mil Cuatro (2004), fecha en la cual falleció. No dejo hijos pendientes por reconocer, ni adoptivos, ni vivos ni muertos, no contrajo matrimonio con otras personas y no conozco a otras personas con igual o mejor Derecho a reclamación que su esposa y que de aparecer un tercero con que demuestre igual o mejor Derecho a reclamación, se harán cargo de la correspondiente repartición=====

IMPORTANTE: LEA BIEN SU DECLARACIÓN. UNA VEZ LEÍDA Y RETIRADA DE LA NOTARIA NO SE ACEPTAN RECLAMOS. MANIFIESTO ASÍ MISMO ESTAR DISPUESTO (S) A RATIFICAR ESTÁ DECLARACIÓN ANTE JUEZ O AUTORIDAD COMPETENTE DEJANDO CONSTANCIA DE NUESTRA ACTIVIDAD LABORAL. NO SIENDO OTRO EL OBJETO DE LA PRESENTE DILIGENCIA SE FIRMA POR QUIENES INTERVIENEN EN ELLA. EN CONSTANCIA Y COMO PRUEBA DE LO ANTERIOR. =====

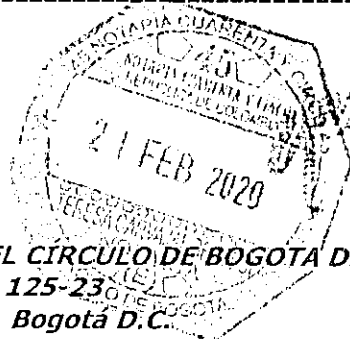
DERECHOS \$13.600 IVA \$2.584 =====

RESOLUCIÓN 01299 DEL 11 DE FEBRERO 2020

DECLARANTE(s)



MARCELO RENGIFO RÍOS
C.C. No. 79498173



NOTARIA CUARENTA Y CINCO (45) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.
Avenida Suba No. 125-23
Conmutador 7210081. Bogotá D.C.
notaria45bogota@outlook.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
NOTARIA QUINTA DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C.
ACTA DECLARACIÓN CON FINES EXTRAPROCESALES
DECRETOS 1557 Y 2282 DE 1989
NUMERO: 2455

NOTARIA 5ª

En la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, Departamento de Cundinamarca, República de Colombia, 19 de Febrero de 2020, ante mi NANCY AREVALO PACHECO, NOTARIA 5 (E) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, Compareció: CASTELBLANCO MARTINEZ NICOLAS, identificado con C.C. No. 79903207, mayor de edad, de estado civil Soltero(a) con Unión Marital de Hecho, profesión u ocupación Productor de Medios Audiovisuales, con domicilio en la Cra 78 B 3B 39, con el fin de rendir DECLARACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO DE CONFORMIDAD CON LOS DECRETOS 1.557 Y 2.282 DE 1.989 ARTICULO 1º NUMERAL 130 y manifestó:

PRIMERO: Mis nombres y apellidos son como han quedado dichos y escritos, de las condiciones civiles y personales antes anotadas. - a presente declaración que consta en esta acta, se realiza bajo la gravedad de juramento y contiene la explicación de las razones de este testimonio y conforme a la ley versa sobre hechos personales, que como declarante realizo o de los cuales tengo conocimiento.

SEGUNDO: DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO lo siguiente:

QUE CONOCÍ(MOS) DE VISTA, TRATO Y COMUNICACIÓN DESDE HACE 23 AÑOS AL (LA) SEÑOR(A) FRANCISCO JAVIER RENGIFO RIOS IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANA No. 79.583.176 DE BOGOTÁ, Y 32 AÑOS A LA SEÑORA LILIANA ELIZABETH MARCIA MORENO QUIEN EN VIDA SE IDENTIFICÓ CON LA CEDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 52.159.756 DE BOGOTÁ, QUIEN ALLECIÓ EL 24 DE MAYO DE 2004 Y QUIEN CONVIVÍA EN UNION LIBRE DESDE EL 5 DE ENERO DE 1998 Y CASADOS EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2002 CON EL(LA) SEÑOR(A) FRANCISCO JAVIER RENGIFO RIOS HASTA EL 24 DE MAYO DE 2004 QUE CONVIVIAN CASADOS DE FORMA PERMANENTE Y SIN INTERRUPCIONES, COMPARTIENDO TECHO, LECHO Y MESA Y QUE DE CUAL FORMA DESCONOCEMOS DE OTRAS PERSONAS CON IGUAL O MAYOR DERECHO A RECLAMAR LO QUE AL(LA) SEÑOR(A) LE PUDIERA CORRESPONDER.

ESTA DECLARACION SE RINDE, PARA PRESENTARLA A QUIEN INTERESE, PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES.

TERCERO: Manifiesto que he leído lo que voluntariamente he declarado ante el NOTARIO, lo he hecho cuidadosamente y no tengo ningún reparo, nada que aclarar, corregir y/o enmendar; Por lo tanto lo otorgo con mi FIRMA dado que es real a lo solicitado al señor NOTARIO. - siendo otro el objeto de la presente diligencia se termina y se firma en constancia y como prueba de lo anteriormente manifestado.

ARÁGRAFO PRIMERO: El Notario ha advertido previa y expresamente a la persona que voluntariamente realiza esta declaración, en ejercicio de los principios jurídicos del control de legalidad que las leyes le imponen, el de la rogación notarial y el de la intermediación; que las personas son libres conforme a la constitución política de Colombia, de manifestar, expresar, declarar, espontáneamente lo que a bien les parezca, pero que esta declaración se debe hacer conforme a la ley, el orden público y las buenas costumbres. REALIZADA ESTA OBSERVACIÓN y ASÍ ACEPTADA SE PROCEDE A SU FIRMA POR PARTE DEL DECLARANTE.

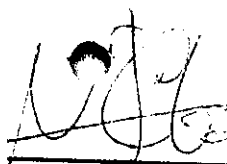
ARÁGRAFO SEGUNDO: El Notario ha explicado al igual que sus funcionarios, al usuario que esta persona acude libre y espontáneamente ante el Notario en ejercicio del principio de rogación, y que todo derecho para su reconocimiento basta la simple manifestación que haga el particular, ante una entidad (Decreto 2150 de 1995, Instrucción Administrativa No. 12 de mayo 7 de 2004), y que por tanto esta declaración extra proceso se autoriza.

Esta declaración se hace por solicitud del compareciente. Ley 962 del 8 de julio de 2005.

PORTANTE: LEA ATENTAMENTE SU DECLARACIÓN. UNA VEZ FUERA DE LA NOTARIA NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI CORRECCIONES, NI RECLAMOS. (RESOLUCIÓN 0691 DEL 24 DE ENERO DE 2019).

Huella Índice Derecho





STELBLANCO MARTINEZ NICOLAS
C.C. 79903207

52331335

NANCY AREVALO PACHECO
NOTARIA 5 (E) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ



AUTENTICACIÓN BIOMÉTRICA PARA DECLARACIÓN EXTRA-PROCESO



En la ciudad de Bogotá D.C., República de Colombia, el diecinueve (19) de febrero de dos mil veinte (2020), en la Notaría Cinco (5) del Círculo de Bogotá D.C., compareció:

NICOLAS CASTELBLANCO MARTINEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía/NUIP #0079903207.

----- Firma autógrafa -----



3j0wjlkq4gj

19/02/2020 - 13:05:22:372

Conforme al Artículo 18 del Decreto-Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Esta acta, forma parte de la declaración extra-proceso DECLARACION JURAMENTADA, rendida por el compareciente con destino a A QUIEN INTERESE.

NANCY ARÉVALO PACHECO

Notaria cinco (5) del Círculo de Bogotá D.C. - Encargada

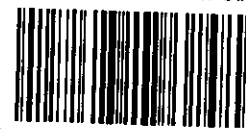
Consulte este documento en www.notariasegura.com.co

Número Único de Transacción: 3j0wjlkq4gj

Rdo

Señores:
PORVENIR S.A.
E.S.D

Radicado - Porvenir S.A.



0105646012776500

Ref. Derecho de Petición

El suscrito **HECTOR ERNESTO BUENO RINCON** identificado con cedula No. 9.736.615 de Armenia -Quindío- y Tarjeta Profesional No. 149.085 del Honorable Consejo Superior de la Judicatura, actuando como apoderado especial del señor **FRANCISCO JAVIER RENGIFO** identificado con cedula de ciudadanía No. 79.583.176 en calidad de esposo de la señora **LILIANA ELIZABETH GARCIA MORENO** quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía No. 52.159.756 quien cotizaba a esta entidad; con ocasión de su fallecimiento el día 24 de mayo del año 2004 por medio del presente escrito solicito el expediente administrativo el cual requiero para efectos pensionales.

Agradezco su colaboración

Atentamente,

HECTOR ERNESTO BUENO RINCON
CC. . 9.736.615 expedida en Armenia, Quindío
T.P. 149. 085 del Consejo Superior de la J.
Dirección: Calle 6 Norte No. 15-37
Teléfono: 3105163494 -(6)7339810
Armenia -Quindío-

PORVENIR

sólo hay uno

104

Bogotá D.C., 2019-06-13

Señor

HECTOR ERNESTO BUENO
CL 6 NORTE 15 37
ARMENIA
QUINDIO

6 4 1/12

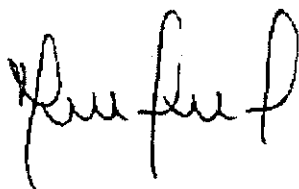
Ref. Rad. Porvenir: 0105646012776500
CC: 52159756
T.N: 9715289
COR-BENEF

Reciba un saludo cordial

De acuerdo a su solicitud como apoderado del señor Francisco Javier Rengifo, relacionada con la pensión de sobrevivencia, con ocasión del fallecimiento de nuestra afiliada Liliana García, le informamos lo siguiente:

Anexamos informe de aportes, movimiento de cuenta, carta de aprobación de la devolución de saldos y notificación de rechazo de la misma, para su correspondiente trámite.

Para nosotros es muy importante haber atendido su solicitud.



JOHANA MARCELA ALZATE CESPEDES
Dirección Atención Integral a Clientes

No permita que un tramitador le cobre dinero. Usted puede hacer sus trámites en Porvenir de manera fácil, segura y sin costo: lo asesoramos, acompañamos y le cumplimos la promesa de servicio. Si alguien le cobra, denúncielo a nuestra auditoría interna al correo lineaetica@porvenir.com.co o al teléfono en Bogotá 3393000 Ext. 77777, fax 3390101 o al A.A. 241800.



Bueno y Compañía

Radicado - Porvenir S.A.



0105646012825000

Señores
PORVENIR
L.C

REF. RECURSO DE RECONSIDERACION O REVISION

HECTOR ERNESTO BUENO RINCON, identificado con cedula de ciudadanía No. 9.736.615 de Armenia y Tarjeta Profesional No. 149.085 del Honorable Consejo Superior de la Judicatura, actuando como apoderado del señor **FRANCISCO JAVIER RENGIFO RIOS**, identificado con Cedula de ciudadanía No. 79.583.176, por intermedio del presente solicitamos la reconsideración o revisión **FRENTE A LA SOLICITUD PENSIONAL** de la señora **LILIANA ELIZABETH GARCIA** y basándonos en los siguientes,

HECHOS

1. El señor Francisco Javier Rengifo y la señora Liliana García, contrajeron matrimonio el 28 de septiembre de 2002, después de Cinco años de convivir como pareja de Hecho.
2. De la unión no se procrearon hijos, siendo el señor Francisco el Único Beneficiario.
3. Infortunadamente la señora Liliana Elizabeth García, falleció el 24 de mayo de 2004.
4. El señor Francisco Javier Rengifo Ríos, solicito la pensión de sobrevivientes a este Fondo el 29 de junio de 2004.
5. La misma fue negada mediante comunicación con radicación No. 0200001024655300 y fechado del 4 de agosto de 2004.
6. El motivo de la negación fue:

"Al consular nuestro sistema observamos que la señora **LILIANA ELIZABETH GARCIA MORENO** no cumplió con el requisito de fidelidad para acceder a la pensión de sobrevivencia y auxilio funerario, por causa de enfermedad, exigido por la reforma pensional, el cual consiste en cumplir con un 20% de fidelidad de cotización al sistema. Según la norma anteriormente transcrita este corresponde al tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió los 20 años de edad (02 de octubre de 1995) y la fecha de su fallecimiento (24 de mayo de 2004), que para el caso en estudio contando todos los periodos cotizados a los fondos de pensiones



obligatorias administrador por PORVENIR S.A., se llegó a un 16.35% de fidelidad al haber cotizado 509 días.

7. Por las razones anteriores PORVENIR S.A. rechaza su solicitud pensional"
8. Porvenir desconoce el número de semanas de cotización que se solicitaban para ese momento.
9. La ley 797 de 2003, que modifico la ley 100 de 1993, establece los requisitos para pensionarse por sobreviviente.

"Requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes"

Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:

(...)

2. los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, siempre y cuando este hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los últimos tres años inmediatamente anteriores al fallecimiento y se acreditan las siguientes condiciones...

10. Dicha norma expresaba cincuenta semanas dentro de los tres años anteriores al fallecimiento, es decir del 25 de mayo de 2001 al 24 de mayo de 2004.

11. Para ese tiempo la señora Liliana Elizabeth García Moreno Contaba con:

Periodo de Pago	Razón Social	Días Cotizados
2001-08	Multiempleos S. A	30
2001-09	Multiempleos S. A	30
2001-09	Avidesa Mac Pollo	7
2001-10	Avidesa Mac Pollo	30
2001-11	Avidesa Mac Pollo	30
2001-12	Avidesa Mac Pollo	30
2002-01	Avidesa Mac Pollo	30
2002-02	Avidesa Mac Pollo	30
2002-03	Avidesa Mac Pollo	30
2002-04	Avidesa Mac Pollo	30
2002-05	Avidesa Mac Pollo	30
2002-06	Avidesa Mac Pollo	30
2002-06	Avidesa Mac Pollo	30
2002-07	Avidesa Mac Pollo	1
2003-05	Avidesa Mac Pollo	12
2003-06	Incubadora Andina S. A	30
2003-07	Incubadora Andina S. A	30
2003-08	Incubadora Andina S. A	30
2003-09	Incubadora Andina S. A	30
2003-10	Incubadora Andina S. A	30
2003-11	Incubadora Andina S. A	30
	Incubadora Andina S. A	26



2004-04	Caja Colombiana de Subsidio Familiar Colsubsidio	10
2004-05	Caja Colombiana de Subsidio Familiar Colsubsidio	24
TOTAL, DIAS		590
TOTAL, SEMANAS		84,28

12. Como se puede observar se cumplía con el requisito de las cincuenta semanas dentro de los tres años anteriores al cumplimiento de la edad.
13. Si bien en ese momento se les exigió el requisito de fidelidad al sistema, este ya no está vigente en nuestro ordenamiento jurídico, pues primeramente la Sentencia C-556 de 2009 y posteriormente en diferentes pronunciamientos como lo fue la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, Sentencia SL-14847 (45677), oct. 29/14, M. P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz).
14. Solicitar ahora este requisito a mi cliente es inconstitucional e ilegal, por ende, se solicita la reconsideración de la pensión.

PETICIONES

PRIMERA: Revocar o Reconsiderar la Comunicación de Negación de la Pensión de sobrevivientes de la causante **LILLIANA ELIZABETH GARCIA MORENO** y a favor de mi representado el señor **FRANCISCO JAVIER RENGIFO**.

SEGUNDO: que el anterior reconocimiento se realice desde la fecha del fallecimiento de la señora **LILLIANA ELIZABETH GARCIA MORENO**, es decir desde el 24 de Mayo de 2004.

TERCERO: que se tenga como único beneficiario al señor **FRANCISCO JAVIER RENGIFO**, puesto que no existe persona con mejor derecho que su señor esposo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

- **SENTENCIA SU-005 DE 2018.**

Regulación legal de la pensión de sobrevivientes

136. La seguridad social es tanto un derecho fundamental social como un servicio público que, además de su reconocimiento constitucional (según dispone el artículo 48 de la Constitución), está protegido por los artículos 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 45 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, 19 del Protocolo de San Salvador, 16 de la Declaración Americana de los Derechos de la Persona, 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y 11, numeral 1, literal "e" de la Convención



sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Este, en los términos de la segunda de las normas en cita se califica como un instrumento para la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables para hacer efectiva la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad. Es un derecho de eminente desarrollo legal que, entre otros aspectos, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, debe determinar las condiciones en que las personas pueden acceder a ciertas prestaciones económicas para la protección de las contingencias derivadas de la desocupación, vejez e incapacidad.

137. La prestación económica denominada "pensión de sobrevivientes" tiene por objeto garantizar una renta periódica a los miembros del grupo familiar de quien dependían económicamente, como consecuencia de su muerte y de haber realizado, en vida, cotizaciones al sistema de seguridad social. Su finalidad es no dejar en una situación de desprotección o de abandono a los beneficiarios del afiliado o pensionado que fallece.

138. Esta prestación económica ha sido objeto de múltiples regulaciones, tal como se recapituló, in extenso, por parte de la Corte, en la sentencia C-397 de 2007, en la que, de manera previa al recuento histórico, se afirmó:

"Examinada la evolución histórica de la regulación de las pensiones de sobrevivientes a partir de 1945, constata la Corte Constitucional que desde la expedición de la Ley 53 de 1945 a la fecha, han transcurrido 62 años durante los cuales se han proferido varias normas tanto de carácter especial relativas a la pensión de sobrevivientes para ciertos trabajadores, como regulaciones integrales del sistema de seguridad social en materia de pensiones dentro del régimen general".

139. Una de tales regulaciones fue la contenida en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado mediante el Decreto 758 de 1990. Reguló los siguientes aspectos: pensión de sobrevivientes por riesgo común (artículo 25); causación y percepción de la pensión de sobrevivientes (artículo 26); beneficiarios en caso de muerte por riesgo común (artículo 27); cuantías de la prestación (artículo 28); requisitos para el acceso a la prestación para el compañero permanente (artículo 29); pérdida y extinción del derecho (artículo 30); indemnización sustitutiva de pensión de sobrevivientes (artículo 31); auxilio funerario (artículo 32); trámite para el pago de la prestación (artículo 33) y procedimiento en caso de controversia entre beneficiarios (artículo 35). Se destaca, en particular, la regulación de los requisitos para acceder, tanto a la pensión de invalidez como de sobrevivientes, según lo dispuso su artículo 6, así: haber cotizado para el seguro de invalidez, vejez y muerte, 150 semanas dentro de los 6 años anteriores a la fecha del fallecimiento, o 300 semanas, en cualquier época con anterioridad al estado de invalidez o a la muerte.

140. Con la implementación del Sistema de Seguridad Social, mediante la Ley 100 de 1993, los requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes se modificaron. Su artículo 46 dispuso que los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez, por riesgo común, podrían acceder al derecho a la pensión de sobrevivientes del afiliado o pensionado que falleciera, y, en relación con el afiliado activo, siempre y cuando hubiese cotizado, por lo menos, 26 semanas al momento de la muerte, o que, habiendo



dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante, por lo menos, 26 semanas en el año inmediatamente anterior a la muerte⁸³.

141. Con posterioridad, la Ley 797 de 2003 alteró las condiciones para acceder a la pensión de sobrevivientes. Su artículo 12 dispuso que tendrían derecho a la pensión de sobrevivientes los miembros del grupo familiar del afiliado que llegara a fallecer, siempre y cuando hubiese cotizado 50 semanas dentro de los 3 últimos años inmediatamente anteriores a la muerte.

4.3. La jurisprudencia constitucional en materia de pensión de sobrevivientes

142. La jurisprudencia constitucional, en materia de pensión de sobrevivientes y de aplicación del principio de la condición más beneficiosa, ha tenido una relación directa con aquella que ha producido la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral. En un primer periodo, que coincide con el tránsito legislativo de las disposiciones del Acuerdo 049 de 1990 (Decreto 758 de 1990) a las de la Ley 100 de 1993, existió una simetría jurisprudencial. Un segundo periodo, más reciente, coincide con el tránsito legislativo de las disposiciones de la Ley 100 de 1993 a la Ley 797 de 2003, que inicia con una construcción autónoma de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y que deviene en una construcción reflexiva, a partir de la jurisprudencia constitucional, por parte de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, y que, para efectos argumentativos, se considera que se consolida con la sentencia de 25 de enero de 2017 (expediente SL45650-2017, radicación N° 45262 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia)⁸⁴, en relación con la no vinculatoriedad del Acuerdo 049 de 1990, en aquellos supuestos en los que el afiliado fallece en vigencia de la Ley 797 de 2003.

143. Son indicativas del primer periodo, las sentencias T-008 de 2006⁸⁵, T-645 de 2008⁸⁶, T-563 de 2012⁸⁷ y T-1074 de 2012⁸⁸. En estas decisiones, la Corte Constitucional no solo analiza con detenimiento la producción jurisprudencial de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en cuanto a la aplicación del principio de la condición más beneficiosa en materia de pensión de sobrevivientes, en el tránsito normativo de las disposiciones del Acuerdo 049 de 1990 (Decreto 758 de 1990) a la Ley 100 de 1993, sino que, la acoge íntegramente. En estas sentencias, la Corporación concede la pensión de sobrevivientes a los beneficiarios que acreditaron que el afiliado había fallecido en vigencia de la Ley 100 de 1993 y que, a pesar de no cumplir los requisitos en ella dispuestos, entendieron acreditados los requisitos para dicho reconocimiento con fundamento en la normativa anterior, que se contiene en el Acuerdo 049 de 1990.

144. De lo dicho se colige: (i) a pesar de que el Legislador no reguló un específico régimen de transición durante el tránsito del Acuerdo 049 de 1990 a la Ley 100 de 1993, en lo relativo a las condiciones para acceder a la pensión de sobrevivientes, la jurisprudencia garantizó en casos concretos la vigencia del principio de la condición más beneficiosa. (ii) La Corte Constitucional reconoció la autoridad de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia para unificar su jurisprudencia y la razonabilidad de su postura. (iii) Existió coincidencia en el alcance que ambas Cortes le otorgaron al principio



de la condición más beneficiosa, en materia de pensión de sobrevivientes, en el tránsito normativo a que se hizo referencia.

145. A diferencia del primer periodo, en el segundo, no se ha dado una coincidencia jurisprudencial semejante. Se trata de los casos de personas interesadas en el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, cuyos familiares (afiliados) murieron en vigencia de la Ley 797 de 2003 y no cotizaron, antes del fallecimiento, el número de semanas mínimo de que trata esta Ley, pero sí las acreditan en los términos dispuestos por el Acuerdo 049 de 1990, antes de su derogatoria por la Ley 100 de 1993.

146. La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en estos supuestos, de manera consecuente con la jurisprudencia del primer periodo a que se hizo referencia, ha considerado que la aplicación del principio de la condición más beneficiosa solo puede extenderse hasta el régimen jurídico inmediatamente anterior (Ley 100 de 1993). La Corte Constitucional, por el contrario, ha considerado razonable extender la aplicación del principio de la condición más beneficiosa no solo al régimen inmediatamente anterior (Ley 100 de 1993), sino a los anteriores a este (sobre todo el Acuerdo 049 de 1990), siempre y cuando la persona hubiere cotizado el número de semanas mínimo que se exigía en este último antes de la entrada en vigencia de la nueva normativa (Ley 100 de 1993). Esto supone que, para la Corte Suprema de Justicia, en los supuestos descritos en el fundamento jurídico (en adelante, f.j.) anterior, el hecho de que el afiliado hubiere cotizado el número mínimo de semanas exigidas en el Acuerdo 049 de 1990 para tener derecho a la pensión de sobrevivientes habría generado una mera expectativa. Por el contrario, para la Corte Constitucional, dicha cotización habría originado una expectativa legítima en los beneficiarios, en la medida en que la consolidación del derecho a la pensión de sobrevivientes debía considerarse exigible una vez se acreditara la muerte del afiliado que hubiere cotizado el número mínimo de semanas exigidas en el Acuerdo 049 de 1990, con independencia de los cambios normativos posteriores.

147. La fundamentación de la nueva postura de la Corte Constitucional, en este segundo periodo, puede dividirse en dos momentos. Uno, en el que, aparentemente continuó aplicando la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Otro, más reciente, y aún no consolidado, sino sujeto a discusión, en el que reconoció la autonomía y la superioridad de su construcción jurisprudencial, en relación con aquella de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

148. Son representativas del primer momento las sentencias T-584 de 2011 y T-228 de 2014. En estos casos, la Corte Constitucional aplicó el principio de la condición más beneficiosa, acudiendo al cumplimiento de los requisitos contemplados en el Acuerdo 049 de 1990 para acceder a la pensión de sobrevivientes respecto de afiliados que hubiesen muerto en vigencia de la Ley 797 de 2003, pero aduciendo que daba aplicación a la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Esta última fundamentación no era adecuada, por cuanto las decisiones jurisprudenciales de esta última no eran aplicables, ya que se referían a casos en los que el afiliado había fallecido en vigencia de la Ley 100 de 1993 y no se discutía la aplicación de una norma "tras anterior", sino la aplicación de la norma inmediatamente anterior⁸⁹. La decisión del año



2014 que se cita, por ejemplo, tenía como fundamento fáctico la muerte de un afiliado en el año 200890.

149. El segundo momento, dentro de este segundo periodo, de la jurisprudencia constitucional, para efectos argumentativos, inicia con la Sentencia T-566 de 201491, en la que se hace explícita la diferencia de criterios, acerca del alcance del principio de la condición más beneficiosa en materia de pensión de sobrevivientes entre la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. En esta sentencia se señala:

“Tenemos entonces que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha conceptuado que la aplicación del principio de la condición más beneficiosa no puede extralimitarse y convertirse en una búsqueda histórica de las normas que pueden resultar aplicables al caso, más allá de la vigente al momento de ocurrir la muerte del afiliado y la inmediatamente anterior a esta.

Aunque esta Sala encuentra razonable dicha posición, no comparte la interpretación que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia hace del principio de la condición más beneficiosa, habida cuenta que ni en la Constitución Política, artículo 53, ni en la jurisprudencia constitucional, el concepto acuñado y desarrollado en torno a dicho principio es restringido el análisis de únicamente dos disposiciones normativas que pueden ser aplicadas a un caso concreto”.

150. En dicho apartado, la Corte Constitucional hacía referencia a la sentencia del 19 de febrero de 2014, con radicado N° 46101, en la cual la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia había señalado lo siguiente: “Ahora, si se pretendiera aplicar el principio de la condición más beneficiosa, no es procedente acoger el citado A.049/1990 para observar sus requisitos, pues dicho principio no le permite al juzgador aplicar a un caso en particular cualquier norma legal que en el pasado”. Esta decisión de la Sala de Casación, a su vez, tenía como fundamento la sentencia del 9 de diciembre de 2008 con radicado N° 32642, de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la que se había señalado lo siguiente:

“En otras palabras, no es admisible aducir, como parámetro para la aplicación de la condición más beneficiosa, cualquier norma legal que haya regulado el asunto en algún momento pretérito en que se ha desarrollado la vinculación de la persona con el sistema de la seguridad social, sino la que regía inmediatamente antes de adquirir plena eficacia y validez el precepto aplicable conforme a las reglas generales del derecho. Más explícitamente, un asunto al que ha de aplicarse la Ley 797 de 2003, o la 860 del mismo año, si se considera más rigurosa ésta frente a la norma reemplazada, es preciso establecer si se satisficieron los requisitos y condiciones de la derogada disposición para, en caso afirmativo, hacer valer la condición más beneficiosa. Lo que no puede el juez es desplegar un ejercicio histórico, a fin de encontrar alguna otra legislación, más allá de la Ley 100 de 1993 que haya precedido –a su vez– a la norma anteriormente derogada por la que viene al caso, para darle una especie de efectos ‘plusultractivos’, que resquebraja el valor de la seguridad jurídica”.



151. En la Sentencia T-566 de 2014, a que se hizo referencia, amén de que se explicitó la diferencia entre la jurisprudencia constitucional y la desarrollada por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, también se hicieron expresas las razones para ello. Estas, en términos generales, han sido reiteradas por algunas de las Salas de Revisión de la Corte, entre ellas, en las sentencias T-735 de 2016, T-084 de 2017 y T-235 de 2017. En esta última (Sentencia T-235 de 2017), se reiteraron, literalmente, los argumentos expuestos por la Corte en la Sentencia T-719 de 2014, así:

“5.1. La condición más beneficiosa establece que si bajo las reglas vigentes no se cumplen los presupuestos para acceder al reconocimiento de una pensión, debe evaluarse si bajo otra normativa derogada del ordenamiento jurídico es posible conceder el derecho, si es que el interesado cumplió con el requisito de densidad de semanas del régimen anterior para garantizar el acceso a la prestación reclamada.[42]

Este postulado encuentra su fundamento en la confianza legítima de los usuarios que están próximos a adquirir o garantizar el acceso a algún derecho pensional porque cumplen el requisito mínimo de semanas cotizadas, [43] pero a raíz de un tránsito legislativo ven frustradas sus aspiraciones, ya sea porque los requisitos se tornan más rigurosos o porque no se acredita alguna de las condiciones restantes. Pero también está soportado en los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad, en tanto sería desmedido aceptar que una persona que cumplió cabalmente con su deber de solidaridad al sistema, aportando un monto considerable de semanas, se quede sin garantizar su derecho a la seguridad social o el de sus beneficiarios cuando se presente el riesgo protegido, precisamente porque sucede un tránsito legislativo que lo perjudica”.

152. Más adelante, en la sentencia que se cita (T-235 de 2017), se señala que el giro obedece a una interpretación más amplia del principio de la condición más beneficiosa, en los siguientes términos:

“Esta posición admite una definición más amplia de la condición más beneficiosa, no solo como un mecanismo que protege a los usuarios de cambios intempestivos en la regulación, sino también como un postulado que los ampara de situaciones que en estricto sentido conducen a resultados desproporcionados en relación con otros afiliados que cumpliendo requisitos menos exigentes tienen derecho a un beneficio pensional, lo cual es incompatible con la Constitución. Con base en esta postura, la condición más beneficiosa también busca proteger a quienes habiendo cotizado un número amplio de semanas se desvincularon del sistema con la confianza de que, por haber asumido con total responsabilidad su carga de solidaridad hacia el mismo, podían esperar idéntica retribución en caso de presentarse el evento protegido (la muerte). Es decir, el objeto principal de este postulado es evitar que un tránsito legislativo genere una afectación desproporcionada de los intereses legítimos de los afiliados, en el sentido de que personas que han aportado una cantidad considerable de semanas se verían privadas del derecho, mientras que la nueva regulación permitiría el acceso al mismo a ciudadanos que han satisfecho cargas de menor entidad”.



153. Por tanto, a diferencia de la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia; de las decisiones de las diferentes Salas de Revisión de la Corte Constitucional es posible inferir la siguiente regla jurisprudencial: cuando un afiliado al Sistema de Seguridad Social fallece, en vigencia de la Ley 797 de 2003, y no cumple las exigencias que esa normativa dispone para que sus beneficiarios accedan a la pensión de sobrevivientes, es posible acudir a las disposiciones contenidas en el Acuerdo 049 de 1990 (o de un régimen anterior), siempre y cuando el causante hubiese cotizado antes de entrar en vigencia la Ley 100 (1 de abril de 1994), el mínimo de semanas requerido por dicho Acuerdo, en aplicación de una concepción amplia del principio de la condición más beneficiosa.

• **Sentencia C-556 de 2009**

Séptima. Inconstitucionalidad de los literales a) y b) del artículo 12 de la Ley 797 de 2003.

El artículo 12 de la Ley 797 de 2003 modificó el 46 de la Ley 100 de 1993, señalando los requisitos para la obtención de la pensión de sobrevivientes.

Para constatar apropiadamente el cambio introducido por el legislador, puede observarse el siguiente cuadro, que permite comparar los requisitos establecidos tanto en la norma original como en la modificada:

Ley 100 de 1993	Ley 797 de 2003
<p>Artículo 46. Requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez, o invalidez por riesgo común, que fallezca.2. Los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, siempre que éste hubiere cumplido alguno de los siguientes requisitos:	<p>Artículo 12. El artículo 46 de la Ley 100 de 1993 quedará así: Requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo común que fallezca y,2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento y se acrediten las siguientes condiciones:



<p>a) Que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas al momento de la muerte, y</p> <p>b) Que, habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca la muerte.</p> <p>Parágrafo. Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente artículo se tendrá en cuenta lo dispuesto en los parágrafos del artículo 33 de la presente ley.</p>	<p>a) Muerte causada por enfermedad: si es mayor de 20 años de edad, haya cotizado el veinticinco por ciento (25%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte años de edad y la fecha del fallecimiento;</p> <p>b) Muerte causada por accidente: si es mayor de 20 años de edad, haya cotizado el veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte años de edad y la fecha del fallecimiento.</p> <p>Parágrafo 1°. Cuando un afiliado haya cotizado el número de semanas mínimo requerido en el régimen de prima en tiempo anterior a su fallecimiento, sin que haya tramitado o recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o la devolución de saldos de que trata el artículo 66 de esta ley, los beneficiarios a que se refiere el numeral 2 de este artículo tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes, en los términos de esta ley.</p> <p>El monto de la pensión para aquellos beneficiarios que, a partir de la vigencia de la Ley, cumplan con los requisitos establecidos en este parágrafo será del 80% del monto que le hubiera correspondido en una pensión de vejez.</p> <p>(Parágrafo 2°. Si la causa del fallecimiento es homicidio, se aplicará lo prescrito para accidente, y si es suicidio, se aplicará lo prescrito para enfermedad.) (Declarado INEXEQUIBLE mediante)</p>
---	---



Como puede observarse, mediante los literales acusados del artículo 12 de la Ley 797 de 2003 fueron aumentados los requisitos previstos en la Ley 100 de 1993, para obtener el derecho a la pensión de sobrevivientes, pues en el anterior artículo sólo se exigía que el afiliado fallecido, si se encontraba aportando al régimen, hubiera cotizado un mínimo de 26 semanas al momento de producirse el deceso; y si había dejado de cotizar, hubiese efectuado aportes como mínimo por 26 semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se produjo el fallecimiento.

Actualmente, el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que modificó la norma original, exige que el afiliado fallecido hubiera cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años (los inmediatamente anteriores al fallecimiento) y que se acrediten los requisitos contemplados en los literales a) y b) de dicho artículo 12 acusado, donde se requiere, para que los beneficiarios tengan derecho, que los afiliados demuestren una fidelidad de cotización para con el sistema de al menos el 20% del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte años de edad y la fecha del fallecimiento.

Es decir, la exigencia de fidelidad de cotización, que no estaba prevista en la Ley 100 de 1993, es una medida regresiva en materia de seguridad social, puesto que la modificación establece un requisito más riguroso para acceder a la pensión de sobrevivientes, desconociendo la naturaleza de esta prestación, la cual no debe estar cimentada en la acumulación de un capital, sino que por el contrario, encuentra su fundamento en el cubrimiento que del riesgo de fallecimiento del afiliado se está haciendo a sus beneficiarios.

Ciertamente, en materia de configuración legislativa en torno a la seguridad social, la carta le reconoce al legislador un amplio margen de configuración, al sostener en el artículo 48 que la seguridad social deberá prestarse con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, "en los términos que establezca la Ley", otorgando así una competencia específica al legislador y reconociéndole un amplio margen de libertad de configuración para regular la materia. No obstante, es obvio que la libertad de configuración legislativa en ese campo no es absoluta, sino que, por el contrario, encuentra límites sustanciales que delimitan su actuación en aras de proteger los principios básicos del Estado Social de Derecho, de suerte que se le impone un superior grado de responsabilidad social y política.

Por tanto, la previsión de establecer un mínimo de cotización, así como una serie de porcentajes y sumas que cubren el riesgo de muerte, debe reportar un beneficio progresivo que favorezca a la colectividad. Específicamente en este caso, lo que se busca es que las contingencias de quien fallece, no repercutan aún de mayor manera contra quienes se encuentran en grave situación involuntaria de necesidad y requieren un trato protector, que les permita continuar con una pervivencia digna.

En este caso, se aumentó el número de semanas cotizadas y se estableció un nuevo requisito de fidelidad al sistema, esto es, una cotización con una densidad del 20% y del 25% del tiempo transcurrido entre los extremos que la ley señala, desconociendo que esa exigencia no puede ser cumplida en igualdad de condiciones; por ejemplo, si una persona al fallecer por enfermedad tiene 40 años de edad, debe contar con un mínimo de 5 años de cotizaciones, que correspondería al 25% del tiempo cotizado, el cual se ve incrementado en la medida que pasan los años, pues siguiendo el mismo ejemplo si el afiliado al fallecer cuenta ya no con 40 sino con 60 años de edad, el requisito correspondiente al 25% del tiempo, ascendería a 10 años de cotizaciones.



Así mismo, tratándose de muerte accidental, si una persona al fallecer tiene 40 años, el requisito del 20% correspondería a 4 años de fidelidad al sistema; si contara con 60 años, el requerimiento sería de 8 años de cotizaciones. Es decir, las nuevas condiciones implican una regresividad que no tiene justificación razonable; por el contrario, constituyen un obstáculo creciente, que aleja la posibilidad de acceder a la pensión de sobrevivientes.

Siendo ello así, cabe recordar que uno de los principios fundantes del orden superior es el reconocimiento, como regla general y sin discriminación, de la primacía de los derechos de la persona, razón por la cual ese requisito de fidelidad aparece como una medida regresiva, que pretendiendo proteger la viabilidad del sistema, desconoce el fin último de la pensión de sobrevivientes, la cual, se repite, procura amparar a las personas, que necesitan atender sus necesidades, sin mengua adicional por la contingencia de la muerte del afiliado de quien dependían.

Por consiguiente, la Corte Constitucional declarará la inexecutable de los literales a) y b) del artículo 12 de la Ley 797 de 2003

ANEXOS

- *Comunicación de negativa de la pensión de sobrevivientes.*
- *Copia de la Historia Laboral de la Señora Liliana Elizabeth García.*
- *Copia de la Comunicación del 11 de noviembre de 2008.*
- *Declaración Extrajuicio de Convivencia.*

NOTIFICACIONES

*Nos pueden notificar en la calle 6ª A Norte # 15 -37 Edificio Alejandría, En Armenia –
Quindío- teléfonos 3104118434 o 3105163493 correo electrónico*

Atentamente

Héctor Ernesto Bueno Rincón

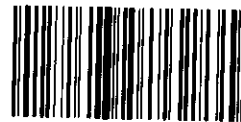
CC. No. 9.736.615 de Armenia

T.P No. 149.085 del Honorable Consejo Superior de la Judicatura.

Señores

ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR
E. S. D.

Radicado - Porvenir S.A.



0105646013337100

Referencia: Derecho de petición

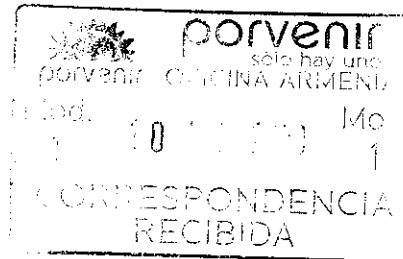
FRANCISCO JAVIER RENGIFO RIOS, mayor de edad, portador de la cédula de ciudadanía No. 79.583.176, actuando en mi propio nombre, con todo respeto manifiesto me permito presentar derecho de petición en el marco del artículo 23 de la Constitución Política y reglamentado por el ley 1755 del 2015, en mi calidad de compañero Permanente la señora **Liliana Elizabeth García Moreno**.

HECHOS

1. Me llamo e identifiqué como ya quedo expresado en el encabezado.
2. Conforme una comunidad de vida compartiendo techo, lecho y mesa con la señora Liliana Elizabeth García Moreno, quien se identificaba con cedula de ciudadanía No. 52.259.756 desde el 05 de enero de 1998 al 28 de septiembre de 2002.
3. Con la señora Liliana Elizabeth el 28 de septiembre de 2002 contraje matrimonio católico en la Parroquia San Alfonso María de Ligorio de la ciudad de Bogotá hasta el día 24 de mayo del 2004 fecha en la que falleció.
4. Desafortunadamente mi compañera permanente y después esposa falleció el 24 de mayo del 2004 y con este hecho termino la unión entre nosotros dos.
5. Me presente a reclamar la pensión de sobrevivientes de mi compañera permanente y esposa posteriormente obteniendo por medio de comunicación Cono. 0200001024655300 dando como respuesta A.F.P. PORVENIR:

"Al consultar nuestro sistema observamos que la señora LILIANA AELIZABETH MORENO no cumplió con el requisito de fidelidad para acceder a la pensión de sobrevivencia y auxilio funerario, por causa de enfermedad exigido por la reforma pensional, el cual consiste en cumplir con un 20% de fidelidad de cotización al sistema. Según la norma anteriormente descrita este corresponde al tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió los 20 años de edad (02 de octubre de 1995) y la fecha de su fallecimiento (24 de mayo de 2004), que para el caso en estudio – contando todos los periodos cotizados a los fondos de pensiones obligatorias administrados por PORVENIR S.A. se llego a un 16.35% de fidelidad al haber cotizado 509 días."

6. Finalmente, PORVENIR S.A. decidió negarme el reconocimiento de la Pensión con los anteriores argumentos.



PETICIONES

PRIMERA: Revocar o Reconsiderar la Comunicación de Negación de la Pensión de sobrevivientes de la causante **LILIANA AELIZABETH MORENO** y a mi favor.

SEGUNDO: que el anterior reconocimiento se realice desde la fecha del fallecimiento de la señora **LILIANA AELIZABETH MORENO**, es decir desde el 24 de mayo del 2004.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

• SENTENCIA SU-005 DE 2018.

Regulación legal de la pensión de sobrevivientes

136. La seguridad social es tanto un derecho fundamental social como un servicio público que, además de su reconocimiento constitucional (según dispone el artículo 48 de la Constitución), está protegido por los artículos 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 45 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, 19 del Protocolo de San Salvador, 16 de la Declaración Americana de los Derechos de la Persona, 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y 11, numeral 1, literal "e" de la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Este, en los términos de la segunda de las normas en cita se califica como un instrumento para la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables para hacer efectiva la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad. Es un derecho de eminente desarrollo legal que, entre otros aspectos, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, debe determinar las condiciones en que las personas pueden acceder a ciertas prestaciones económicas para la protección de las contingencias derivadas de la desocupación, vejez e incapacidad.

137. La prestación económica denominada "pensión de sobrevivientes" tiene por objeto garantizar una renta periódica a los miembros del grupo familiar de quien dependían económicamente, como consecuencia de su muerte y de haber realizado, en vida, cotizaciones al sistema de seguridad social. Su finalidad es no dejar en una situación de desprotección o de abandono a los beneficiarios del afiliado o pensionado que fallece.

138. Esta prestación económica ha sido objeto de múltiples regulaciones, tal como se recapituló, in extenso, por parte de la Corte, en la sentencia C-397 de 2007, en la que, de manera previa al recuento histórico, se afirmó:

"Examinada la evolución histórica de la regulación de las pensiones de sobrevivientes a partir de 1945, constata la Corte Constitucional que desde la expedición de la Ley 53 de 1945 a la fecha, han transcurrido 62 años durante los cuales se han proferido varias normas tanto de carácter especial relativas a la pensión de sobrevivientes

para ciertos trabajadores, como regulaciones integrales del sistema de seguridad social en materia de pensiones dentro del régimen general”.

139. *Una de tales regulaciones fue la contenida en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado mediante el Decreto 758 de 1990. Reguló los siguientes aspectos: pensión de sobrevivientes por riesgo común (artículo 25); causación y percepción de la pensión de sobrevivientes (artículo 26); beneficiarios en caso de muerte por riesgo común (artículo 27); cuantías de la prestación (artículo 28); requisitos para el acceso a la prestación para el compañero permanente (artículo 29); pérdida y extinción del derecho (artículo 30); indemnización sustitutiva de pensión de sobrevivientes (artículo 31); auxilio funerario (artículo 32); trámite para el pago de la prestación (artículo 33) y procedimiento en caso de controversia entre beneficiarios (artículo 35). Se destaca, en particular, la regulación de los requisitos para acceder, tanto a la pensión de invalidez como de sobrevivientes, según lo dispuso su artículo 6, así: haber cotizado para el seguro de invalidez, vejez y muerte, 150 semanas dentro de los 6 años anteriores a la fecha del fallecimiento, o 300 semanas, en cualquier época con anterioridad al estado de invalidez o a la muerte.*

140. *Con la implementación del Sistema de Seguridad Social, mediante la Ley 100 de 1993, los requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes se modificaron. Su artículo 46 dispuso que los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez, por riesgo común, podrían acceder al derecho a la pensión de sobrevivientes del afiliado o pensionado que falleciera, y, en relación con el afiliado activo, siempre y cuando hubiese cotizado, por lo menos, 26 semanas al momento de la muerte, o que, habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante, por lo menos, 26 semanas en el año inmediatamente anterior a la muerte.*

141. *Con posterioridad, la Ley 797 de 2003 alteró las condiciones para acceder a la pensión de sobrevivientes. Su artículo 12 dispuso que tendrían derecho a la pensión de sobrevivientes los miembros del grupo familiar del afiliado que llegara a fallecer, siempre y cuando hubiese cotizado 50 semanas dentro de los 3 últimos años inmediatamente anteriores a la muerte.*

4.3. La jurisprudencia constitucional en materia de pensión de sobrevivientes

142. *La jurisprudencia constitucional, en materia de pensión de sobrevivientes y de aplicación del principio de la condición más beneficiosa, ha tenido una relación directa con aquella que ha producido la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral. En un primer periodo, que coincide con el tránsito legislativo de las disposiciones del Acuerdo 049 de 1990 (Decreto 758 de 1990) a las de la Ley 100 de 1993, existió una simetría jurisprudencial. Un segundo periodo, más reciente, coincide con el tránsito legislativo de las disposiciones de la Ley 100 de 1993 a la Ley 797 de 2003, que inicia con una construcción autónoma de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y que deviene en una construcción reflexiva, a partir de la jurisprudencia constitucional, por parte de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, y que, para efectos argumentativos, se considera que se consolida con la sentencia de 25 de enero de 2017 (expediente SL45650-2017, radicación N° 45262*

de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia)⁸⁴, en relación con la no vinculatoriedad del Acuerdo 049 de 1990, en aquellos supuestos en los que el afiliado fallece en vigencia de la Ley 797 de 2003.

143. Son indicativas del primer periodo, las sentencias T-008 de 200685, T-645 de 200886, T-563 de 201287 y T-1074 de 201288. En estas decisiones, la Corte Constitucional no solo analiza con detenimiento la producción jurisprudencial de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en cuanto a la aplicación del principio de la condición más beneficiosa en materia de pensión de sobrevivientes, en el tránsito normativo de las disposiciones del Acuerdo 049 de 1990 (Decreto 758 de 1990) a la Ley 100 de 1993, sino que, la acoge íntegramente. En estas sentencias, la Corporación concede la pensión de sobrevivientes a los beneficiarios que acreditaron que el afiliado había fallecido en vigencia de la Ley 100 de 1993 y que, a pesar de no cumplir los requisitos en ella dispuestos, entendieron acreditados los requisitos para dicho reconocimiento con fundamento en la normativa anterior, que se contiene en el Acuerdo 049 de 1990.

144. De lo dicho se colige: (i) a pesar de que el Legislador no reguló un específico régimen de transición durante el tránsito del Acuerdo 049 de 1990 a la Ley 100 de 1993, en lo relativo a las condiciones para acceder a la pensión de sobrevivientes, la jurisprudencia garantizó en casos concretos la vigencia del principio de la condición más beneficiosa. (ii) La Corte Constitucional reconoció la autoridad de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia para unificar su jurisprudencia y la razonabilidad de su postura. (iii) Existió coincidencia en el alcance que ambas Cortes le otorgaron al principio de la condición más beneficiosa, en materia de pensión de sobrevivientes, en el tránsito normativo a que se hizo referencia.

145. A diferencia del primer periodo, en el segundo, no se ha dado una coincidencia jurisprudencial semejante. Se trata de los casos de personas interesadas en el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, cuyos familiares (afiliados) murieron en vigencia de la Ley 797 de 2003 y no cotizaron, antes del fallecimiento, el número de semanas mínimo de que trata esta Ley, pero sí las acreditan en los términos dispuestos por el Acuerdo 049 de 1990, antes de su derogatoria por la Ley 100 de 1993.

146. La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en estos supuestos, de manera consecuente con la jurisprudencia del primer periodo a que se hizo referencia, ha considerado que la aplicación del principio de la condición más beneficiosa solo puede extenderse hasta el régimen jurídico inmediatamente anterior (Ley 100 de 1993). La Corte Constitucional, por el contrario, ha considerado razonable extender la aplicación del principio de la condición más beneficiosa no solo al régimen inmediatamente anterior (Ley 100 de 1993), sino a los anteriores a este (sobre todo el Acuerdo 049 de 1990), siempre y cuando la persona hubiere cotizado el número de semanas mínimo que se exigía en este último antes de la entrada en vigencia de la nueva normativa (Ley 100 de 1993). Esto supone que, para la Corte

Suprema de Justicia, en los supuestos descritos en el fundamento jurídico (en adelante, f.j.) anterior, el hecho de que el afiliado hubiere cotizado el número mínimo de semanas exigidas en el Acuerdo 049 de 1990 para tener derecho a la pensión de sobrevivientes habría generado una mera expectativa. Por el contrario, para la Corte Constitucional, dicha cotización habría originado una expectativa legítima en los beneficiarios, en la medida en que la consolidación del derecho a la pensión de sobrevivientes debía considerarse exigible una vez se acreditara la muerte del afiliado que hubiere cotizado el número mínimo de semanas exigidas en el Acuerdo 049 de 1990, con independencia de los cambios normativos posteriores.

147. La fundamentación de la nueva postura de la Corte Constitucional, en este segundo periodo, puede dividirse en dos momentos. Uno, en el que, aparentemente continuó aplicando la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Otro, más reciente, y aún no consolidado, sino sujeto a discusión, en el que reconoció la autonomía y la superioridad de su construcción jurisprudencial, en relación con aquella de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

148. Son representativas del primer momento las sentencias T-584 de 2011 y T-228 de 2014. En estos casos, la Corte Constitucional aplicó el principio de la condición más beneficiosa, acudiendo al cumplimiento de los requisitos contemplados en el Acuerdo 049 de 1990 para acceder a la pensión de sobrevivientes respecto de afiliados que hubiesen muerto en vigencia de la Ley 797 de 2003, pero aduciendo que daba aplicación a la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Esta última fundamentación no era adecuada, por cuanto las decisiones jurisprudenciales de esta última no eran aplicables, ya que se referían a casos en los que el afiliado había fallecido en vigencia de la Ley 100 de 1993 y no se discutía la aplicación de una norma "tras anterior", sino la aplicación de la norma inmediatamente anterior⁸⁹. La decisión del año 2014 que se cita, por ejemplo, tenía como fundamento fáctico la muerte de un afiliado en el año 2008⁹⁰.

149. El segundo momento, dentro de este segundo periodo, de la jurisprudencia constitucional, para efectos argumentativos, inicia con la Sentencia T-566 de 2014⁹¹, en la que se hace explícita la diferencia de criterios, acerca del alcance del principio de la condición más beneficiosa en materia de pensión de sobrevivientes entre la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. En esta sentencia se señala:

"Tenemos entonces que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha conceptualizado que la aplicación del principio de la condición más beneficiosa no puede extralimitarse y convertirse en una búsqueda histórica de las normas que pueden resultar aplicables al caso, más allá de la vigente al momento de ocurrir la muerte del afiliado y la inmediatamente anterior a esta.

Aunque esta Sala encuentra razonable dicha posición, no comparte la interpretación que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia hace del principio de la condición

más beneficiosa, habida cuenta que ni en la Constitución Política, artículo 53, ni en la jurisprudencia constitucional, el concepto acuñado y desarrollado en torno a dicho principio es restringido el análisis de únicamente dos disposiciones normativas que pueden ser aplicadas a un caso concreto”.

150. *En dicho apartado, la Corte Constitucional hacía referencia a la sentencia del 19 de febrero de 2014, con radicado N° 46101, en la cual la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia había señalado lo siguiente: "Ahora, si se pretendiera aplicar el principio de la condición más beneficiosa, no es procedente acoger el citado A.049/1990 para observar sus requisitos, pues dicho principio no le permite al juzgador aplicar a un caso en particular cualquier norma legal que en el pasado". Esta decisión de la Sala de Casación, a su vez, tenía como fundamento la sentencia del 9 de diciembre de 2008 con radicado N° 32642, de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la que se había señalado lo siguiente:*

"En otras palabras, no es admisible aducir, como parámetro para la aplicación de la condición más beneficiosa, cualquier norma legal que haya regulado el asunto en algún momento pretérito en que se ha desarrollado la vinculación de la persona con el sistema de la seguridad social, sino la que regía inmediatamente antes de adquirir plena eficacia y validez el precepto aplicable conforme a las reglas generales del derecho. Más explícitamente, un asunto al que ha de aplicarse la Ley 797 de 2003, o la 860 del mismo año, si se considera más rigurosa ésta frente a la norma reemplazada, es preciso establecer si se satisficieron los requisitos y condiciones de la derogada disposición para, en caso afirmativo, hacer valer la condición más beneficiosa. Lo que no puede el juez es desplegar un ejercicio histórico, a fin de encontrar alguna otra legislación, más allá de la Ley 100 de 1993 que haya precedido –a su vez- a la norma anteriormente derogada por la que viene al caso, para darle un especie de efectos 'plusultractivos', que resquebraja el valor de la seguridad jurídica”.

151. *En la Sentencia T-566 de 2014, a que se hizo referencia, amén de que se explicitó la diferencia entre la jurisprudencia constitucional y la desarrollada por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, también se hicieron expresas las razones para ello. Estas, en términos generales, han sido reiteradas por algunas de las Salas de Revisión de la Corte, entre ellas, en las sentencias T-735 de 2016, T-084 de 2017 y T-235 de 2017. En esta última (Sentencia T-235 de 2017), se reiteraron, literalmente, los argumentos expuestos por la Corte en la Sentencia T-719 de 2014, así:*

"5.1. La condición más beneficiosa establece que si bajo las reglas vigentes no se cumplen los presupuestos para acceder al reconocimiento de una pensión, debe evaluarse si bajo otra normativa derogada del ordenamiento jurídico es posible conceder el derecho, si es que el interesado cumplió con el requisito de densidad de semanas del régimen anterior para garantizar el acceso a la prestación reclamada.

Este postulado encuentra su fundamento en la confianza legítima de los usuarios que están próximos a adquirir o garantizar el acceso a algún derecho pensional porque cumplen el requisito mínimo de semanas cotizadas, [43] pero a raíz de un tránsito legislativo ven frustradas sus aspiraciones, ya sea porque los requisitos se tornan más rigurosos o porque no se acredita alguna de las condiciones restantes. Pero también está soportado en los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad, en tanto sería desmedido aceptar que una persona que cumplió cabalmente con su deber de solidaridad al sistema, aportando un monto considerable de semanas, se quede sin garantizar su derecho a la seguridad social o el de sus beneficiarios cuando se presente el riesgo protegido, precisamente porque sucede un tránsito legislativo que lo perjudica”.

152. Más adelante, en la sentencia que se cita (T-235 de 2017), se señala que el giro obedece a una interpretación más amplia del principio de la condición más beneficiosa, en los siguientes términos:

“Esta posición admite una definición más amplia de la condición más beneficiosa, no solo como un mecanismo que protege a los usuarios de cambios intempestivos en la regulación, sino también como un postulado que los ampara de situaciones que en estricto sentido conducen a resultados desproporcionados en relación con otros afiliados que cumpliendo requisitos menos exigentes tienen derecho a un beneficio pensional, lo cual es incompatible con la Constitución. Con base en esta postura, la condición más beneficiosa también busca proteger a quienes habiendo cotizado un número amplio de semanas se desvincularon del sistema con la confianza de que, por haber asumido con total responsabilidad su carga de solidaridad hacia el mismo, podían esperar idéntica retribución en caso de presentarse el evento protegido (la muerte). Es decir, el objeto principal de este postulado es evitar que un tránsito legislativo genere una afectación desproporcionada de los intereses legítimos de los afiliados, en el sentido de que personas que han aportado una cantidad considerable de semanas se verían privadas del derecho, mientras que la nueva regulación permitiría el acceso al mismo a ciudadanos que han satisfecho cargas de menor entidad”.

153. Por tanto, a diferencia de la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, de las decisiones de las diferentes Salas de Revisión de la Corte Constitucional es posible inferir la siguiente regla jurisprudencial: cuando un afiliado al Sistema de Seguridad Social fallece, en vigencia de la Ley 797 de 2003, y no cumple las exigencias que esa normativa dispone para que sus beneficiarios accedan a la pensión de sobrevivientes, es posible acudir a las disposiciones contenidas en el Acuerdo 049 de 1990 (o de un régimen anterior), siempre y cuando el causante hubiese cotizado antes de entrar en vigencia la Ley 100 (1 de abril de 1994), el mínimo de semanas requerido por dicho Acuerdo, en aplicación de una concepción amplia del principio de la condición más beneficiosa.

ANEXOS

Tómese como anexos los siguientes:

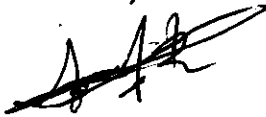
- *Fotocopia simple de mi cedula de ciudadanía.*
- *Relación histórica de movimientos Porvenir de Liliana Elizabeth García Moreno.*
- *Oficio emitido por Porvenir S.A. del 4 de agosto de 2004 con radicado 0200001024655300.*
- *Acta de declaración juramentada con fines extraprocesales No. 0240.*
- *Registro de matrimonio con Liliana Elizabeth García Moreno.*
- *Registro civil de defunción de Liliana Elizabeth García Moreno.*

NOTIFICACIONES

Para efectos de notificaciones se podrán realizar a:

- *Calle 12 No. 3-66 Centro Comercial Villa del Robledo oficina 225.*
- *correo electrónico: franciscorengiforios@gmail.com*

Cordialmente,



FRANCISCO JAVIER RENGIFO RIOS
CC. No. 79.583.176

2410/

Bogotá D.C

Doctor
HECTOR ERNESTO BUENO RINCON
hectorbueno@gmail.com

Ref.: Rad. Porvenir 0105646012825000
Afiliada: **LILIANA ELIZABETH GARCIA MORENO**
CC. 52159756
T.N. 9761137
DEF – BENEF

Reciban un cordial saludo de PORVENIR S.A.

En atención a su comunicación de la referencia, la cual eleva en calidad de apoderado del señor **FRANCISCO JAVIER RENGIFO RIOS** requiriendo la reconsideración pensional con ocasión del fallecimiento de la señora **LILIANA ELIZABETH GARCIA MORENO** nos permitimos hacer los siguientes comentarios:

Resulta importante manifestarle, que para la fecha de fallecimiento de la señora **LILIANA ELIZABETH GARCIA MORENO**, esto es el 24 de mayo de 2004, se encontraba vigente el requisito de fidelidad y conforme a ello esta Sociedad Administradora definió otorgar la devolución de saldos existentes en la cuenta de ahorro individual de nuestra afiliada, por el incumplimiento del requisito antes señalado.

No obstante lo anterior, en atención a su solicitud procedimos nuevamente a realizar el correspondientes estudio de la solicitud pensional del señor **FRANCISCO JAVIER RENGIFO RIOS** sin tener en cuenta el requisito de fidelidad, con el fin de determinar si su poderdante acredita o no la calidad de beneficiario de la pensión de sobreviviente en calidad de cónyuge, para lo cual se tuvo en cuenta la documentación e información allegada al momento de la reclamación pensional y la obtenida por esta Administradora dentro del referido estudio.

En ese orden de ideas, al verificar la fecha fallecimiento de nuestra afiliada la cual acaeció el día 24 de mayo de 2004 conforme al Registro Civil de Defunción Indicativo Serial N° 5510712, se estableció que el señor **FRANCISCO JAVIER RENGIFO RIOS** no convivió con nuestra afiliada el tiempo mínimo requerido antes de su fallecimiento que le permitiera acceder al beneficio pensional reclamado, lo anterior teniendo en cuenta que el señor **FRANCISCO JAVIER RENGIFO RIOS** y

LILIANA ELIZABETH GARCIA MORENO contrajeron matrimonio el día 28 de septiembre de 2002 y nuestra afiliada falleció el día 24 de mayo de 2004, con lo cual se acreditando un total de 1 año y 7 meses de convivencia, tiempo que resulta insuficiente para el cumplimiento del requisito de convivencia exigido por la ley de 5 años previos al fallecimiento.

Sobre este particular, la norma es puntual al señalar los requisitos para acceder al reconocimiento del beneficio pensional por sobrevivencia, los cuales para el caso de los cónyuges exige 5 años de convivencia previos al fallecimiento, tal y como lo ha expuesto la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Laboral en Sentencia SL 4835 – 2015:

“para la causación efectiva de la pensión de sobrevivientes, por la muerte de un afiliado, como sucede en este asunto, el cónyuge, compañero o compañera permanente, debe acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante por lo menos durante cinco (5) años continuos con anterioridad a dicho suceso”

Ahora bien, en lo que respecta a la declaración juramentada rendida ante la notaria 5 del círculo de Bogotá D.C., el pasado 4 de julio de 2019 por el señor **FRANCISCO JAVIER RENGIFO RIOS** en la cual indica haber convivido con la señora **LILIANA ELIZABETH GARCIA MORENO** desde el 5 de enero de 1998 hasta el día 28 de septiembre de 2002 fecha de celebración del matrimonio, nos permitimos informar que dicha declaración resulta contradictoria respecto de las obrantes en el expediente pensional, pues ante el notario 53 del círculo de Bogotá D.C., el pasado 23 de junio de 2004, los señores **NICOLAS CASTEBLANCO MARTINEZ, MARCELA RENGIFO RIOS** y **FRANCISCO JAVIER RENGIFO** declararon bajo la gravedad de juramento, que la convivencia de su poderdante y la señora **LILIANA ELIZABETH GARCIA MORENO** inicio el 28 de septiembre de 2002 sin que para ese entonces se informaran tiempos de convivencia previos a la celebración del matrimonio.

Teniendo en cuenta lo anterior, es claro para esta Administradora que el requisito de 5 años de convivencia previos al fallecimiento de la señora **LILIANA ELIZABETH GARCIA MORENO** no se encuentra acreditado por parte del señor **FRANCISCO JAVIER RENGIFO** en consecuencia su calidad de beneficiario de la pensión de sobreviviente no nació a la vida jurídica, por lo tanto no resulta jurídicamente posible atender de manera favorable su solicitud de reconocimiento y pago de la pensión reclamada.

En los términos damos respuesta a su solicitud de información.

Atentamente,

JORGE EDUARDO MONTAÑÉZ CORTÉS
Director Jurídico de Asesoría Previsional
JEM/Camilo Avila.
C.C. Expediente No. PS 8062

2410/

Bogotá D.C

Señor

FRANCISCO JAVIER RENGIFO RIOS

franciscorengiforios@gmail.com

Ref.: Rad. Porvenir 0105646013337100

Afiliada: **LILIANA ELIZABETH GARCIA MORENO**

CC. 52159756

T.N. 10138364

DEF – BENEFA

Reciban un cordial saludo de PORVENIR S.A.

En atención a su comunicación de la referencia, mediante la cual requiere a esta Administradora reconsiderar la definición de su solicitud pensional con ocasión del fallecimiento de la señora **LILIANA ELIZABETH GARCIA MORENO** para lo cual nos permitimos hacer los siguientes comentarios:

Resulta importante manifestarle, que para la fecha de fallecimiento de la señora **LILIANA ELIZABETH GARCIA MORENO**, esto es el 24 de mayo de 2004, se encontraba vigente el requisito de fidelidad y conforme a ello esta Sociedad Administradora definió otorgar la devolución de saldos existentes en la cuenta de ahorro individual de nuestra afiliada, por el incumplimiento del requisito antes señalado.

No obstante, en atención a su solicitud procedimos nuevamente a realizar el correspondiente estudio de su solicitud pensional sin tener en cuenta el requisito de fidelidad, con el fin de determinar si Usted acredita o no la calidad de beneficiario de la pensión de sobreviviente en calidad de cónyuge, para lo cual se tuvo en cuenta la documentación e información allegada al momento de la reclamación pensional y la obtenida por esta Administradora dentro del referido estudio.

En ese orden de ideas, al verificar el requisito de convivencia encontramos que conforme la fecha fallecimiento de nuestra afiliada, esto es el 24 de mayo de 2004 de acuerdo con al Registro Civil de Defunción Indicativo Serial N° 5510712, Usted no convivió con nuestra afiliada el tiempo mínimo requerido antes de su fallecimiento que le permitiera acceder al beneficio pensional reclamado, lo anterior teniendo en cuenta que Usted y la señora **LILIANA ELIZABETH GARCIA MORENO**

contrajeron matrimonio el día 28 de septiembre de 2002 y nuestra afiliada falleció el día 24 de mayo de 2004, con lo cual se acreditando un total de 1 año y 7 meses de convivencia, tiempo que resulta insuficiente para el cumplimiento del requisito de convivencia exigido por la ley de 5 años previos al fallecimiento.

Sobre este particular, la norma es puntual al señalar los requisitos para acceder al reconocimiento del beneficio pensional por sobrevivencia, los cuales para el caso de los cónyuges exige 5 años de convivencia previos al fallecimiento, tal y como lo ha expuesto la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Laboral en Sentencia SL 4835 – 2015:

"para la causación efectiva de la pensión de sobrevivientes, por la muerte de un afiliado, como sucede en este asunto, el cónyuge, compañero o compañera permanente, debe acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante por lo menos durante cinco (5) años continuos con anterioridad a dicho suceso"

Ahora bien, en lo que respecta a las declaraciones juramentada rendida ante la notaria 5 del círculo de Bogotá D.C., el pasado 4 de julio de 2019, así como la rendidla ante el Notario 45 del Circulo de Bogotá., el pasado 21 de febrero de 2020 por Usted y en las cuales indica haber convivido con la señora **LILIANA ELIZABETH GARCIA MORENO** desde el 5 de enero de 1998 hasta el día 28 de septiembre de 2002 fecha de celebración del matrimonio, nos permitimos informar que dichas declaraciones resultan contradictorias respecto de las obrantes en el expediente pensional, pues ante el notario 53 del círculo de Bogotá D.C., el pasado 23 de junio de 2004, los señores **NICOLAS CASTEBLANCO MARTINEZ, MARCELA RENGIFO RIOS** y Usted declararon bajo la gravedad de juramento, que la convivencia con la señora **LILIANA ELIZABETH GARCIA MORENO** inicio el 28 de septiembre de 2002 sin que para ese entonces se informaran tiempos de convivencia previos a la celebración del matrimonio.

Teniendo en cuenta lo anterior, es claro para esta Administradora el requisito de 5 años de convivencia previos al fallecimiento de la señora **LILIANA ELIZABETH GARCIA MORENO** no se encuentra acreditado, en consecuencia su calidad de beneficiario de la pensión de sobreviviente no nació a la vida jurídica, por lo tanto no resulta jurídicamente posible atender de manera favorable su solicitud de reconocimiento y pago de la pensión reclamada.

En los términos damos respuesta a su solicitud de información.

Atentamente,

JORGE EDUARDO MONTAÑÉZ CORTÉS
Director Jurídico de Asesoría Previsional
JEM/Camilo Avila.
C.C. Expediente No. PS 8062

Señores
PORVENIR S.A.



REF: Reclamación administrativa

Cordial saludo,

FRANCISCO JAVIER RENGIFO RIOS, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.583.176 de Bogotá, con domicilio en Buga, mediante el presente me permito muy respetuosamente por este medio realizar reclamación de pensión de sobreviviente, con ocasión al fallecimiento de mi esposa, la señora **LILIANA ELIZABETH GARCIA MORENO**, quien en vida se encontraba identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.159.756 de Santa fe de Bogotá, cuya fecha de deceso es el 24 de mayo de 2004.

Anexos:

- Registro civil de defunción de Liliana Elizabeth García Moreno.
- Fotocopia de mi cedula de ciudadanía.

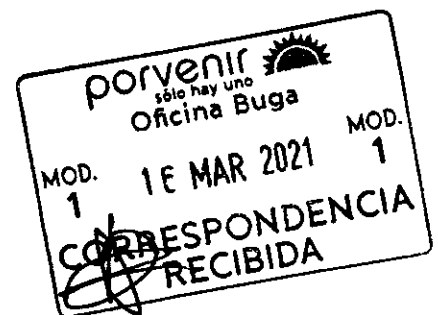
Notificaciones:

Para efectos de notificaciones y envío de correspondencia tómese la siguiente dirección:

- Carrera 10 Numero 20-29 de Buga, Valle del Cauca.
- Correo electrónico: franciscorengiforios@gmail.com

Atentamente,

FRANCISCO JAVIER RENGIFO RIOS
C.C. 79.583.176 de Bogotá



Pudica tercero

ORGANIZACION ELECTORAL
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

GAVIRIA

REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION

465

Indicativo
Serial

5510712

Detalles de la oficina de registro

País	Departamento	Municipio	Corregimiento	Inspección de Policía	Código
COLOMBIA	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C.	NOTARIA 32		9795

COLOMBIA CUNDINAMARCA BOGOTA D.C. NOTARIA 32

Apellido y nombres completos

GARCIA MORENO LILIANA ELIZABETH

Identificación de identificación (Clase y número)

C.C. No. 52.199.756 DE SANTA FE DE BOGOTA

Sexo (en Letras)

FEMENINO

Detalles de la defunción

País
 Departamento | Municipio | Corregimiento | Inspección de Policía | Código || COLOMBIA | CUNDINAMARCA | BOGOTA D.C. | | | |

Fecha de la defunción

2005 10 5

Hora

19:05 PM

Número de certificado de defunción

A- 2055083

Presunción de muerte

Fecha de la sucesión

Nombre y cargo del funcionario

CLAUDIA LILIANA ACOSTA C.

R.M. No. 52054889

Detalles de la defunción

Apellido y nombres completos

EDGAR DAVID RESTO H.

Identificación de identificación (Clase y número)

C.C. No. 15.030.154 DE LORICA CORDOBA

Sexo (en Letras)

MALE

Fecha de la defunción

2005 10 5

Hora

2:15

Número de certificado de defunción

GERMAN GILBERTO MORENO L. NOT. 32

Detalles de la defunción

Apellido y nombres completos

PADRES: ALFONSO GARCIA / ELIZABETH MORENO DE GARCIA

Identificación de identificación (Clase y número)

C.C. No. 15.030.154 DE LORICA CORDOBA

Sexo (en Letras)

MALE

Fecha de la defunción

2005 10 5

ES FIEL COPIA TOMADA DE SU ORIGINAL
(ARTICULO 114 Y 115 DECRETO 1260/70)

BOGOTA D.C.

ESTE REGISTRO CIVIL TIENE VALIDEZ PERMANENTE

LUIS GUILLERMO TELLO FLOREZ
SECRETARIO DELEGADO PARA COPIAS
(DECRETO 1534 DE 1989)
NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C.

ORIGINAL PARA LA OFICINA DE REGISTRO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 79.583.176

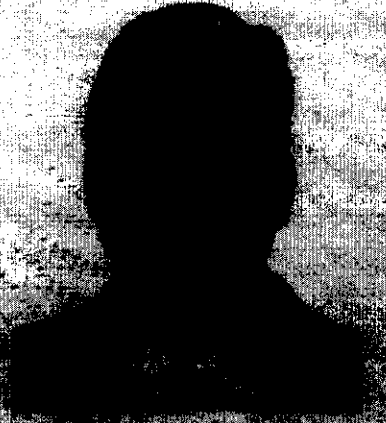
RENGIFO RIOS

NOMBRE

FRANCISCO JAVIER

FIRMA





ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11 DIC 1971

BOGOTÁ D.C.
(CIUDADANÍA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.90

O+

M

ESTATURA G.S. RH SEXO

11 DIC 1971 BOGOTÁ D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN



A-1500150-01035325-M-0079583176-20180901

0082471148A-1

1336101657



Hector Bueno Rincon <hectorbueno@gmail.com>

Fwd: Confidencial - Respuesta a su requerimiento.10433534 adjunto archivos cifrados

francisco javier rengifo <franciscorengiforios@gmail.com>
Para: hectorbueno@gmail.com

9 de abril de 2021, 9:30

----- Forwarded message -----

De: <contacto@porvenir.com.co>

Date: lun, 5 abr 2021 a las 9:34

Subject: Confidencial - Respuesta a su requerimiento.10433534 adjunto archivos cifrados

To: <franciscorengiforios@gmail.com>

Reciba un saludo cordial,

En archivo anexo encontrará respuesta a su requerimiento.

Este archivo está protegido. Para abrirlo y ver su contenido, por favor digite el número de cédula del afiliado a Porvenir.

Si su número de identificación es inferior a los 8 dígitos por favor agregue a la izquierda la cantidad de ceros (0) correspondiente hasta completar dicha cantidad.

Cordialmente,

PAOLA ANDREA ÁLVAREZ CARVAJAL
Dirección Atención Integral a Clientes
PAAC/Gicela C.

Por favor no responda este mensaje, corresponde a un buzón automático de envío de información.

AVISO: La información contenida en este mensaje y en los archivos adjuntos es confidencial y reservada y está dirigida exclusivamente a su destinatario, sin la intención de que sea conocida por terceros, por lo tanto, de conformidad con las normas legales vigentes, su interceptación, sustracción, extravío, reproducción, lectura o uso esta prohibido a cualquier persona diferente. Si por error ha recibido este mensaje por favor discúlpenos, notifiquenoslo y elimínelo. Las opiniones, conclusiones y otra información contenida en este correo no relacionadas con el negocio oficial del remitente, deben entenderse como personales y de ninguna manera son avaladas por PORVENIR S.A.

PORVENIR S.A. ha adoptado mecanismos tendientes a evitar que este mensaje y sus anexos, contengan virus o defectos que puedan llegar a afectar los computadores o los sistemas que lo reciban, sin embargo, es responsabilidad del destinatario confirmar éste hecho al momento de su recepción y apertura. En consecuencia PORVENIR S.A. se exonera de cualquier responsabilidad por daños, alteraciones o perjuicios que se ocasionen en su recepción o uso.

Para cambiar su clave por favor dirijase al funcionario de Porvenir de contacto

5 adjuntos



noname
17K



Modelo_de_Carta_Manual_Afiliado.pdf
236K



52159756 dev.pdf
56K



52159756.pdf
165K



Guia de autoservicios.pdf
3347K

Reciba un saludo cordial,



En el archivo anexo encontrará respuesta a su requerimiento.

Cordialmente,

JORGE EDUARDO MONTAÑEZ CORTES

Director Jurídico de Prestaciones

JEMC/ Camilo A.

C.C. Archivo y Correspondencia



Cuida el Ambiente. Por favor no imprima si no es necesario.
Think Green. Please don't print if it's not necessary.

Por favor no responda este mensaje, corresponde a un buzón automático de envío de información.

2410/

Bogotá D.C

Señor

FRANCISCO JAVIER RENGIFO RIOS

franciscorengiforios@gmail.com

Ref.: Rad. Porvenir 0105646013337100

Afiliada: **LILIANA ELIZABETH GARCIA MORENO**

CC. 52159756

T.N. 10138364

DEF – BENEF

Reciban un cordial saludo de PORVENIR S.A.

En atención a su comunicación de la referencia, mediante la cual requiere a esta Administradora reconsiderar la definición de su solicitud pensional con ocasión del fallecimiento de la señora **LILIANA ELIZABETH GARCIA MORENO** para lo cual nos permitimos hacer los siguientes comentarios:

Resulta importante manifestarle, que para la fecha de fallecimiento de la señora **LILIANA ELIZABETH GARCIA MORENO**, esto es el 24 de mayo de 2004, se encontraba vigente el requisito de fidelidad y conforme a ello esta Sociedad Administradora definió otorgar la devolución de saldos existentes en la cuenta de ahorro individual de nuestra afiliada, por el incumplimiento del requisito antes señalado.

No obstante, en atención a su solicitud procedimos nuevamente a realizar el correspondiente estudio de su solicitud pensional sin tener en cuenta el requisito de fidelidad, con el fin de determinar si Usted acredita o no la calidad de beneficiario de la pensión de sobreviviente en calidad de cónyuge, para lo cual se tuvo en cuenta la documentación e información allegada al momento de la reclamación pensional y la obtenida por esta Administradora dentro del referido estudio.

En ese orden de ideas, al verificar el requisito de convivencia encontramos que conforme la fecha fallecimiento de nuestra afiliada, esto es el 24 de mayo de 2004 de acuerdo con al Registro Civil de Defunción Indicativo Serial N° 5510712, Usted no convivió con nuestra afiliada el tiempo mínimo requerido antes de su fallecimiento que le permitiera acceder al beneficio pensional reclamado, lo anterior teniendo en cuenta que Usted y la señora **LILIANA ELIZABETH GARCIA MORENO**

contrajeron matrimonio el día 28 de septiembre de 2002 y nuestra afiliada falleció el día 24 de mayo de 2004, con lo cual se acreditando un total de 1 año y 7 meses de convivencia, tiempo que resulta insuficiente para el cumplimiento del requisito de convivencia exigido por la ley de 5 años previos al fallecimiento.

Sobre este particular, la norma es puntual al señalar los requisitos para acceder al reconocimiento del beneficio pensional por sobrevivencia, los cuales para el caso de los cónyuges exige 5 años de convivencia previos al fallecimiento, tal y como lo ha expuesto la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Laboral en Sentencia SL 4835 – 2015:

“para la causación efectiva de la pensión de sobrevivientes, por la muerte de un afiliado, como sucede en este asunto, el cónyuge, compañero o compañera permanente, debe acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante por lo menos durante cinco (5) años continuos con anterioridad a dicho suceso”

Ahora bien, en lo que respecta a las declaraciones juramentada rendida ante la notaria 5 del círculo de Bogotá D.C., el pasado 4 de julio de 2019, así como la rendidla ante el Notario 45 del Circulo de Bogotá., el pasado 21 de febrero de 2020 por Usted y en las cuales indica haber convivido con la señora **LILIANA ELIZABETH GARCIA MORENO** desde el 5 de enero de 1998 hasta el día 28 de septiembre de 2002 fecha de celebración del matrimonio, nos permitimos informar que dichas declaraciones resultan contradictorias respecto de las obrantes en el expediente pensional, pues ante el notario 53 del círculo de Bogotá D.C., el pasado 23 de junio de 2004, los señores **NICOLAS CASTEBLANCO MARTINEZ, MARCELA RENGIFO RIOS** y Usted declararon bajo la gravedad de juramento, que la convivencia con la señora **LILIANA ELIZABETH GARCIA MORENO** inicio el 28 de septiembre de 2002 sin que para ese entonces se informaran tiempos de convivencia previos a la celebración del matrimonio.

Teniendo en cuenta lo anterior, es claro para esta Administradora el requisito de 5 años de convivencia previos al fallecimiento de la señora **LILIANA ELIZABETH GARCIA MORENO** no se encuentra acreditado, en consecuencia su calidad de beneficiario de la pensión de sobreviviente no nació a la vida jurídica, por lo tanto no resulta jurídicamente posible atender de manera favorable su solicitud de reconocimiento y pago de la pensión reclamada.

En los términos damos respuesta a su solicitud de información.

Atentamente,

JORGE EDUARDO MONTAÑÉZ CORTÉS
Director Jurídico de Asesoría Previsional

JEM/Camilo Avila.
C.C. Expediente No. PS 8062

579/
Bogotá, D.C.,

11 NOV. 2008

Señor

FRANCISCO JAVIER RENGIFO RIOS

Calle 30 No. 86 A - 69. Casa 39

Bogotá, D.C.

Radicado - Porvenir S.A.



0200001061231800

Devolucion de Saldos
Ref Rad. Porvenir N.A.
Afiliado: LILIANA GARCIA
C.C. 52.159.756
T.N. N.A.
COR - BEN

Apreciado Señor:

Reciba un cordial saludo de Porvenir S.A. Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías.

En respuesta a su solicitud citada en la referencia, atentamente le manifiesto que esta Sociedad Administradora giró con destino a la cuenta bancaria presentada por usted del Banco Bancolombia, el porcentaje abajo indicado sobre el saldo existente en la cuenta individual de ahorro pensional de la señora Liliana Garcia (q.e.p.d.)

Así entonces la distribución de los saldos se efectuaron de la siguiente manera:

NOMBRES	PARENTESCO	PORCENTAJE
FRANCISCO RENGIFO	ESPOSO	100

En lo que respecta al bono pensional me permito informarle que el afiliado no cumplió los requisitos exigidos en el literal a del artículo 115 de la ley 100 de 1993 (150 semanas antes del traslado de régimen) para tener derecho al reconocimiento del bono pensional.


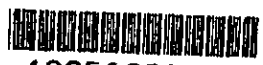
Cualquier información adicional gustosamente será atendida por esta Dirección.

Cordialmente,

DIRECCION DE PRESTACIONES PORVENIR S.A.

Johan M.

c.c. Dirección de Prestaciones
Archivo y Correspondencia
Exp. 8062

		FECHA DEL ENVÍO 13 11 2008	GUÍA CRÉDITO No. <small>AL PAGO DE ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPO PARA INSTALACIÓN DE EQUIPO</small>	
ORIGEN 10 BOGOTÁ		DESTINO BOGOTÁ D.C.		
DE SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS		FRANCISCO JAVIER RENGIFO RIOS CL 30 86A 69 CS 39 *200001061231800		
Dirección: CRA 13 # 27-75		NIT/CC: 109		
Teléfono: 259 2 214		CÓDIGO CLIENTE 10SER64317		
REC. EN SERVIDORA		COD. FACTURACIÓN 10SER64317		
REMITENTE NOMBRE LEGAL Y SELLO SERVIDORA S.A.		EL DESTINATARIO RECIBE A CONFORMIDAD 1005692266		
800144331/3		PRUEBA DE ENTREGA 1005692266		

579/
Bogotá, D.C., 11 NOV. 2008

Señor
FRANCISCO JAVIER RENGIFO RIOS
Calle 30 No. 86 A - 69. Casa 39
Bogotá, D.C.

Radicado - Porvenir S.A.



0200001061231800

Devolucion de Saldos
Ref Rad. Porvenir N.A.
Afiliado: LILIANA GARCIA
C.C. 52.159.756
T.N. N.A.
COR - BEN

Apreciado Señor:

Reciba un cordial saludo de Porvenir S.A. Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías.

En respuesta a su solicitud citada en la referencia, atentamente le manifiesto que esta Sociedad Administradora giró con destino a la cuenta bancaria presentada por usted del Banco Bancolombia, el porcentaje abajo indicado sobre el saldo existente en la cuenta individual de ahorro pensional de la señora Liliana Garcia (q.e.p.d.)

Así entonces la distribución de los saldos se efectuaron de la siguiente manera:

NOMBRES	PARENTESCO	PORCENTAJE
FRANCISCO RENGIFO	ESPOSO	100

En lo que respecta al bono pensional me permito informarle que el afiliado no cumplió los requisitos exigidos en el literal a del artículo 115 de la ley 100 de 1993 (150 semanas antes del traslado de régimen) para tener derecho al reconocimiento del bono pensional.

Cualquier información adicional gustosamente será atendida por esta Dirección.

Cordialmente,

DIRECCION DE PRESTACIONES PORVENIR S.A.

Johan M.

c.c. Dirección de Prestaciones
Archivo y Correspondencia
Exp. 8062